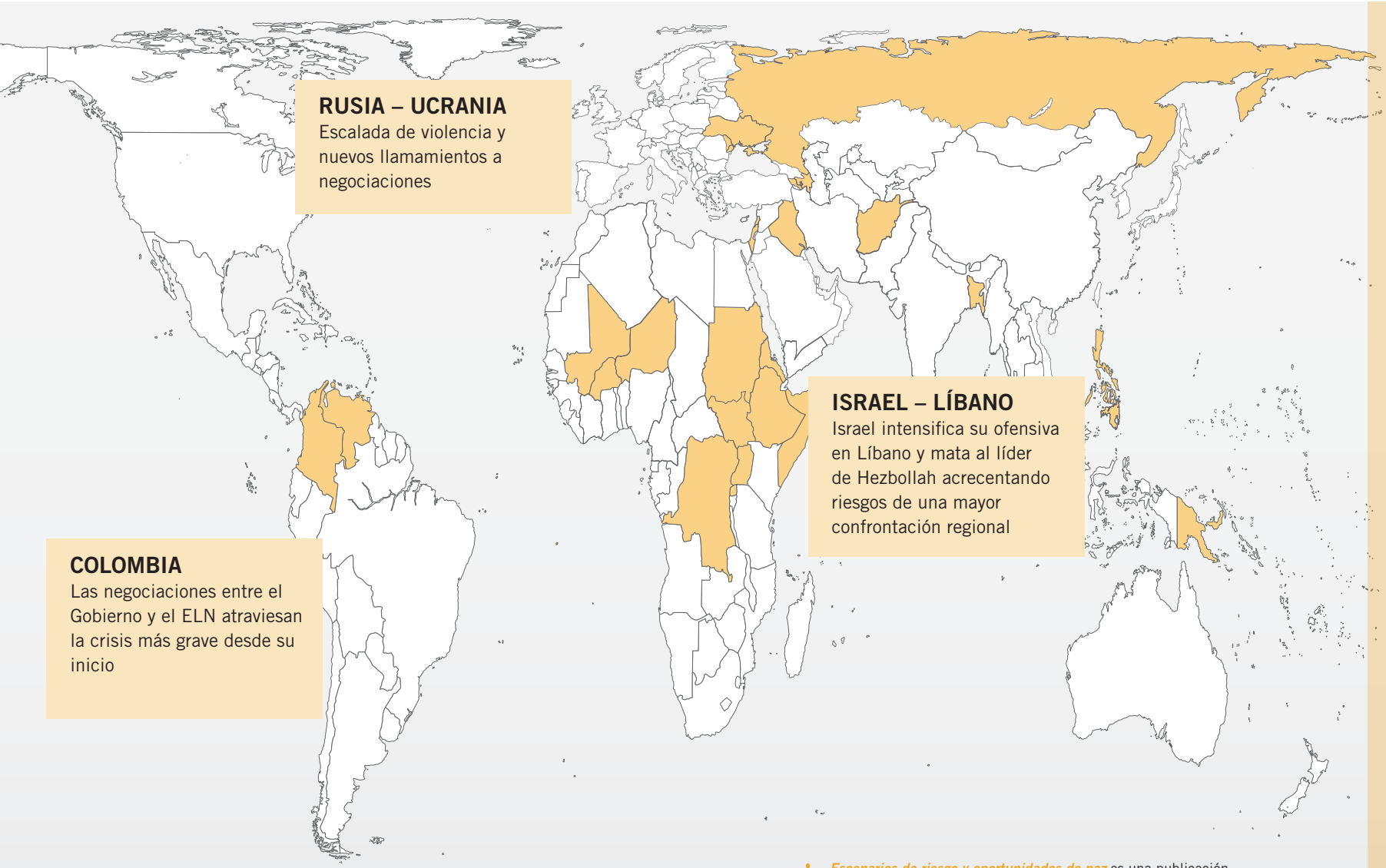
Escenarios de riesgo y oportunidades de paz

Octubre de 2024

ècp escola de cultura de pau

UAB Universitat Autònoma de Barcelona



RUSIA – UCRANIA
Escalada de violencia y nuevos llamamientos a negociaciones

ISRAEL – LÍBANO
Israel intensifica su ofensiva en Líbano y mata al líder de Hezbollah acrecentando riesgos de una mayor confrontación regional

COLOMBIA
Las negociaciones entre el Gobierno y el ELN atraviesan la crisis más grave desde su inicio

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

Eritrea – Etiopía (Tigré)
Etiopía – Somalia
Malí
RDC (este) – Rwanda
RDC (este) – Rwanda – Uganda
Rwanda
Sahel Occidental
Sudán
Sudán del Sur

AMÉRICA

Venezuela

ASIA Y EL PACÍFICO

Afganistán
Bangladesh
Filipinas
Papúa Nueva Guinea (Bougainville)

EUROPA

Armenia – Azerbaiyán
Moldova

ORIENTE MEDIO

Iraq
Israel – Palestina

Con el apoyo de:

ACCD Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Este número abarca el periodo entre julio y el 30 de septiembre de 2024.

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre julio y el 30 de septiembre de 2024.

Casos destacados:

ISRAEL – LÍBANO: Israel intensifica su ofensiva en Líbano y mata al líder de Hezbollah acrecentando riesgos de una mayor confrontación regional

COLOMBIA: Las negociaciones entre el Gobierno y el ELN atraviesan la crisis más grave desde su inicio

RUSIA – UCRANIA: Escalada de violencia y nuevos llamamientos a negociaciones

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

ERITREA – ETIOPÍA (TIGRÉ): Tigré revela contactos entre representantes de esta región etíope y de Eritrea facilitados por EAU

ETIOPÍA – SOMALIA: Continúan las conversaciones entre ambos países para resolver la crisis provocada por el memorando entre Etiopía y Somalilandia

MALÍ: Crisis diplomática con Ucrania tras emboscada rebelde contra fuerzas de seguridad malienses y miembros del Grupo Wagner

RDC (ESTE) – RWANDA: Persiste la violencia a pesar de los intentos por establecer un alto el fuego

RDC (ESTE) – RWANDA – UGANDA: El Grupo de Expertos de RDC confirma la presencia de Rwanda en territorio congolés y la colaboración de Uganda con el M23

RWANDA: Paul Kagame obtiene el 99% de los votos en las elecciones presidenciales

SAHEL OCCIDENTAL: Se deteriora la situación de seguridad en la región en medio de la reconfiguración de las alianzas diplomáticas y de seguridad

SUDÁN: Fracasa un nuevo intento de conversaciones de paz para resolver la crisis

SUDÁN DEL SUR: El Gobierno transicional suspende las elecciones presidenciales mientras se complican las negociaciones de paz de Nairobi

AMÉRICA

VENEZUELA: Organismos internacionales denuncian falta de transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales y represión de las posteriores protestas

ASIA

AFGANISTÁN: Se agravan las violaciones a los derechos de las mujeres y se intensifica el llamamiento al reconocimiento del Apartheid de género como crimen internacional

BANGLADESH: Las protestas ciudadanas fuerzan la dimisión de la primera ministra y el nombramiento de un gobierno interino en la crisis política más grave del país en los últimos años

FILIPINAS: El Gobierno y el NDFP hacen un llamamiento a la reanudación de las conversaciones formales

PAPÚA NUEVA GUINEA (BOUGAINVILLE): Designan a un nuevo mediador de Naciones Unidas en las negociaciones sobre la independencia de la isla de Bougainville

EUROPA

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Avances y dificultades para un acuerdo de paz

MOLDOVA: Elecciones presidenciales y referéndum en medio de tensiones geopolíticas

ORIENTE MEDIO

IRAQ: Alerta por reforma normativa que podría legalizar el matrimonio infantil

ISRAEL-PALESTINA: Continúa agravándose la situación en Gaza y persiste bloqueo en negociaciones de alto el fuego

Miles de personas intentan cruzar hacia Siria tras la intensificación de los ataques israelíes sobre Líbano. Fuente: UNHCR, Vadeem Makheev

ISRAEL – LÍBANO

Israel intensifica su ofensiva en Líbano y mata al líder de Hezbollah acrecentando riesgos de una mayor confrontación regional

Israel intensifica significativamente su ofensiva militar sobre Líbano provocando la muerte de más de un millar de personas en pocos días y otros graves impactos en la población civil. La situación se agravó de manera notoria a partir de la segunda quincena de septiembre, después de que las autoridades israelíes anunciaran su intención de poner el foco en el frente norte, mientras en paralelo continuaban sus ataques sobre Gaza. En un contexto de persistentes ataques en distintos puntos del país, una de las ofensivas israelíes provocó la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, abriendo un capítulo de consecuencias inciertas en Oriente Medio y acrecentando los riesgos de una confrontación regional de mayor alcance.

Los ataques israelíes en Líbano causaron la muerte de un millar de personas en pocos días y masivos desplazamientos de población

Un repaso a la cronología de acontecimientos da cuenta de la dimensión de la violencia y del acelerado deterioro de la situación en Líbano. El 16 de septiembre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fijó explícitamente como objetivo oficial de su campaña bélica el retorno seguro de la población israelí desplazada del norte del país desde octubre de 2023 –unas 68.000 personas. En los dos días siguientes, el 17 y 18 de septiembre, miles de aparatos de comunicación utilizados por miembros de Hezbollah –buscas y *walkie-talkies*– fueron detonados de manera simultánea en todo Líbano, matando a decenas de integrantes de la organización y a civiles e hiriendo a centenares de personas, incluyendo el embajador iraní en Líbano. Explosiones similares se produjeron en Siria el 17 de septiembre. Cientos de milicianos de Hezbollah quedaron ciegos o perdieron dedos de las manos como consecuencia de esta acción. Los ataques fueron atribuidos ampliamente a Israel, que –en línea con su política de no reclamar la autoría de acciones de este tipo perpetradas en el extranjero– no reivindicó su responsabilidad en las explosiones. El mismo 18 de septiembre el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, informó del inicio de una "nueva fase" de su campaña militar en la región que tendría como nuevo centro de gravedad la frontera norte, a donde se destinarían nuevas fuerzas y recursos. El anuncio de envío de tropas a la zona alentó desde entonces las perspectivas de una nueva invasión terrestre israelí en el sur de Líbano.

En los días posteriores al 17 y 18 de septiembre, Israel lanzó amplios ataques aéreos en zonas del sur y el este de Líbano, pero también en algunas áreas de Beirut. En uno de ellos, el 20 de septiembre, habrían muerto 16 comandantes de las fuerzas de élite de Hezbollah,

Radwan. Por su parte, Hezbollah disparó cientos de cohetes contra Israel, incluyendo un misil balístico contra la sede del Mossad en Tel Aviv que fue interceptado por Israel. Según informaciones proporcionadas por el Gobierno libanés, solo en dos días (23 y 24 de septiembre) los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 569 personas en Líbano, entre ellas una cincuentena de menores. A finales de septiembre la cifra ya superaba el millar de personas. La ofensiva israelí, la más intensa desde octubre de 2023, motivó expresiones de alarma de numerosas organizaciones de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas. La misión de la ONU en Líbano, UNIFIL, manifestó su preocupación por la seguridad de la población civil y recordó que los ataques deliberados contra civiles constituyen una vulneración flagrante del derecho internacional. Los ataques israelíes también motivaron un masivo desplazamiento forzado de población en Líbano. En menos de una semana –del 23 al 27 de septiembre– más de 120.000 se habían visto forzadas a abandonar sus hogares. A finales de septiembre, el primer ministro libanés advertía que los ataques israelíes podrían haber provocado ya el desplazamiento de un millón de personas.

Hezbollah ha insistido en que detendría sus ataques a Israel cuando este pusiera fin a su campaña militar sobre Gaza, vinculando así el destino del frente norte con el del frente sur

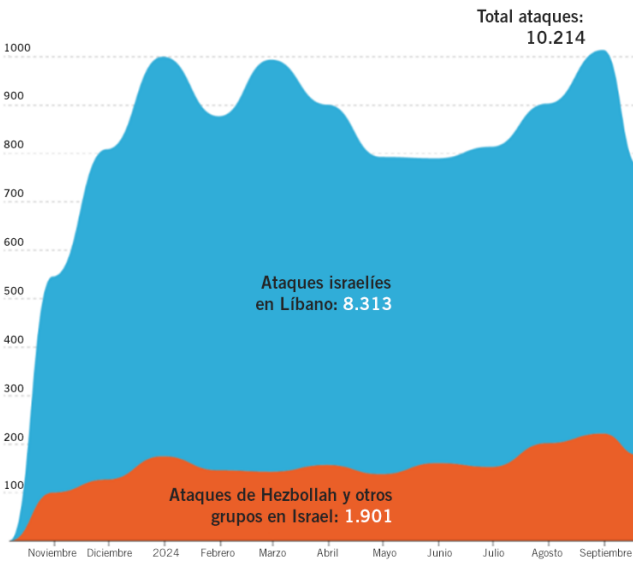
Cabe recordar que la escalada en la ofensiva israelí sobre Líbano tiene lugar en el contexto del genocidio en Gaza y el incremento de las tensiones regionales en el último año, que entre otros desarrollos se ha materializado en intercambios de fuego casi diarios entre Israel y Hezbollah (y otros grupos armados, en menor medida) a lo largo de la llamada Línea Azul (Blue Line), la línea de separación fijada por Naciones Unidas en 2000 y que opera como frontera de facto entre Israel y Líbano. Antes de los hechos de septiembre, estos ataques ya habían provocado el desplazamiento de unas 112.000 en Líbano, así como de unas 68.000 en el norte de Israel. Según estimaciones, desde octubre de 2023 y hasta septiembre de 2024 se habían producido más de 10.000 ataques transfronterizos, de los cuales la inmensa mayoría –más de tres cuartas partes– habían sido lanzados por Israel. El resto de las ofensivas serían autoría de Hezbollah y de organizaciones armadas libanesas (Fuerzas al-Fajr, Movimiento Amal) y palestinas con presencia en Líbano (Brigadas Qassam de Hamas y Brigadas al-Quds de la Jihad Islámica palestina) (Ver gráfico 1). El último informe de UNIFIL también alertaba sobre la intensidad de los intercambios –1.500 proyectiles desde el norte y 3.000 desde el sur de la Línea Azul entre febrero y julio– y sobre el uso de municiones como fósforo blanco en territorio libanés, práctica por la que Israel ha sido denunciada por organismos de derechos humanos. Hasta antes de la última escalada, las hostilidades habían provocado la muerte de más de 500 personas en Líbano –incluyendo un centenar de civiles– y de 23 soldados y 26 civiles en Israel, según datos de AP. Las estimaciones de ACLED hasta el 20 de septiembre apuntaban a 752 muertes en Líbano y 33 en Israel. A finales de septiembre, la ratio de letalidad apuntaba a una treintena de muertes en Líbano por cada muerte en Israel.

Hezbollah ha insistido en que detendría sus ataques a Israel cuando este pusiera fin a su campaña militar sobre Gaza, vinculando así el destino del frente norte con el del frente sur. A pesar de la dialéctica y los constantes intercambios de fuego, la percepción general era que las partes mantenían la escalada acotada geográficamente y que la selección de objetivos –en su mayoría militares– indicaba un cierto entendimiento tácito y que se intentaba evitar una guerra abierta de gran escala. Esta dinámica es la que ha cambiado sustantivamente en septiembre y, según analistas, Israel pretende que Hezbollah renuncie a su exigencia de alto el fuego en Gaza como prerrequisito del fin de sus ataques en el norte de Israel –hasta ahora un objetivo no negociable para la milicia shií– y que retire sus fuerzas de la frontera, al norte del río Litani. Tras los ataques a los sistemas de comunicación y ante las perspectivas de una invasión terrestre, Nasrallah había advertido que el sur del Líbano se convertiría en una trampa mortal para las tropas israelíes.

Ataques transfronterizos Israel-Líbano

Período: 7 octubre 2023 - 20 septiembre 2024

Israel ha atacado a Hezbollah cuatro veces más que el grupo libanés



Fuente: ACLED y al-Jazeera, 20 de septiembre

Descabezamiento de Hezbollah y perspectivas

En este contexto, el 27 de septiembre Israel lanzó un devastador ataque en el barrio de Dahiye de Beirut, feudo de Hezbollah, utilizando bombas de hasta una tonelada con capacidad para destruir búnkeres. La ofensiva destruyó varios edificios residenciales, bajo uno

de los cuales se habría encontrado el líder del partido-milicia shií, su secretario general Hassan Nasrallah. Israel anunció la muerte del dirigente y horas después la noticia fue confirmada por Hezbollah. El asesinato de quien había sido el máximo líder de Hezbollah durante más de tres décadas –y con él de otros dirigentes de la organización– ha sido interpretado como una demostración de fuerza de Israel y como un hecho que marca un punto de inflexión, con consecuencias aún imprevisibles para el futuro de Oriente Medio. Netanyahu aseguró que el asesinato de Nasrallah era un paso necesario para cambiar el equilibrio de poder en la región y advirtió que Israel continuaría con sus ofensivas. La muerte de Nasrallah, de hecho, no ha frenado los ataques israelíes y la milicia libanesa también ha continuado lanzando proyectiles contra Israel. Solo el domingo 29 de septiembre, los ataques israelíes en el centro de Beirut causaron la muerte de un centenar de personas, según fuentes oficiales. Al finalizar septiembre se informaba de nuevas muertes entre dirigentes de Hezbollah, como Ali Karaki –jefe del frente sur–, del comandante de Hamas en Líbano, Fateh Sherif Abu el-Amin, y tres dirigentes del Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), incluido su jefe militar. En las ofensivas previas de septiembre Israel había dado muerte a otros altos dirigentes de Hezbollah, entre ellos al jefe de las fuerzas de élite de la milicia, Ibrahim Aqil, y en julio al que era número dos de la organización, Fuad Shukr. (Este último fue asesinado después de que un ataque explosivo en los Altos del Golán ocupados por Israel causara la muerte de 12 menores drusos, en una acción que Israel atribuyó a Hezbollah, que la milicia negó y que algunos analistas atribuyeron a una acción fallida).

El asesinato del líder de Hezbollah ha sido ampliamente considerado como un hecho con consecuencias aún imprevisibles para el futuro de Oriente Medio

Netanyahu dio la luz verde a la operación contra Nasrallah desde Nueva York, después de ofrecer un encendido discurso en la Asamblea General de la Naciones Unidas en el que amenazó a Hezbollah e Irán. La decisión se produjo en momentos en que se intentaba avanzar en un acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hezbollah por un período de tres semanas. La iniciativa, que estaba siendo promovida por EEUU y Francia, con apoyo de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Japón, Qatar, Reino Unido y la Unión Europea, advertía sobre el riesgo de escalada, reiteraba la necesidad de apostar por salidas diplomáticas y subrayaba la necesidad de implementar la resolución 1701 de Naciones Unidas y la 2735 que insta a un alto el fuego en Gaza. En las horas previas al asesinato de Nasrallah, el Gobierno de Israel había dado a entender que estaba considerando la propuesta. Tras el ataque que acabó con la vida del dirigente de Hezbollah –en una operación que Israel bautizó como "Nuevo Orden"– el primer ministro libanés acusó a Netanyahu de desatender los llamamientos internacionales a un cese el fuego. EEUU respaldó la acción de Israel contra Nasrallah –Joe Biden la calificó como una "medida de justicia"–, mientras que Irán advirtió que el asesinato cambiaba las reglas del juego y que la muerte del líder de Hezbollah sería vengada.

Estos desarrollos abren un escenario pleno de interrogantes. Una de ellas es cuál será la respuesta de Teherán. Observadores y analistas identifican diversas opciones y costes. El gobierno iraní podría delegar la respuesta en alguno de sus proxies y evitar una confrontación directa. Incluso podría presionar a Hezbollah a aceptar un cese el fuego que no dependa de un alto el fuego en Gaza, como era su condición hasta ahora. Por el contrario, podría optar por una respuesta militar directa, a sabiendas de las capacidades militares, tecnológicas y de inteligencia de Israel que ha demostrado para penetrar en Hezbollah y, seguramente, también en Irán. Algunas voces anticipan que un ataque directo a Israel similar al de abril en respuesta al ataque israelí contra el consulado de Damasco que fuera ampliamente interceptado por los sistemas antimisiles de Israel podría erosionar la capacidad de Irán de proyectarse como una potencia militar y favorecer una crisis de legitimidad interna. Algunos analistas apuntan que el asesinato de Nasrallah dificulta la aproximación de los reformistas iraníes, incluido el presidente. Según ha trascendido, Masoud Pezeshkian considera que ha obtenido escasas respuestas por atender a las peticiones de algunos actores occidentales respecto a no buscar revancha tras el asesinato por Israel en Teherán del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, a finales de julio (véase análisis sobre Israel-Palestina). A través de intermediarios, el mandatario iraní habría recibido promesas de que si Teherán no respondía al asesinato de Haniyeh, Israel firmaría con acuerdo de alto el fuego en Gaza. El presidente iraní estaría bajo presiones de sectores del ala más dura del régimen para demostrar su respaldo al "eje de la resistencia". Según voces expertas, a nivel general, la línea dominante del régimen iraní apostaría por evitar una guerra directa con Israel –para no jugar en el terreno que desea Netanyahu y que arrastraría aún más a EEUU–, pero sin abandonar a Hezbollah.

La muerte de Nasrallah y de otros altos dirigentes de Hezbollah también alienta interrogantes sobre sus consecuencias en el futuro de la organización y reflexiones sobre el impacto a largo plazo de la política de asesinatos por parte de Israel. Aunque diversos expertos coinciden en que Hezbollah se ha visto duramente afectada por los hechos recientes, existen dudas respecto a si constituirá un golpe definitivo para el grupo y apuntan que pasará tiempo antes de poder valorar los impactos. En el pasado, indican, Israel ha dado muerte de otros dirigentes –al anterior líder de Hezbollah, Abbas al-Musawi en 1992 y en el caso de Hamas a fundadores como Ahmed Yassin y Abdel Aziz al Rantisi, en 2004– sin que ello supusiera una ventaja estratégica a largo plazo. Analistas subrayan que la estructura organizativa de Hezbollah aseguraría su continuidad. Otras voces apuntan a que Hezbollah aún no ha utilizado contra Israel los misiles más sofisticados

de sus arsenales y que un ataque a Israel coordinado con otros actores armados con base en Siria, Iraq, Yemen y, eventualmente también Irán, podría derivar en una espiral que acabaría involucrando más directamente a EEUU.

Tras el asesinato de Nasrallah, y mientras continuaba sus ataques en Líbano, Israel lanzó también una serie de ofensivas aéreas en Yemen en áreas controladas por los al-houthistas e infraestructuras clave, como los puertos de Hodeidah y Ras Issa, plantas eléctricas y de combustible. Los al-houthistas, que durante meses han lanzado ataques contra objetivos israelíes y barcos internacionales en el Mar Rojo, habían lanzado el día previo un misil contra el aeropuerto de Ben Gurion en momentos en que Netanyahu regresaba desde Nueva York. En julio, Israel también atacó Yemen después de que los al-houthistas consiguieron sortear las defensas antiaéreas israelíes y alcanzar Tel Aviv. Al cierre de esta edición, Israel había iniciado una operación terrestre en localidades fronterizas dentro de Líbano que describía como "limitada" y "localizada".

Horas después, Irán lanzó un ataque con misiles balísticos sobre Israel. Teherán justificó su acción como un acto de autodefensa, vinculándolo a ataques previos de Israel y a sus acciones en Gaza y Líbano. El ministro de Exteriores iraní aseguró que habían ejercido contención durante dos meses para dar espacio a una tregua en Gaza, que solo habían atacado objetivos de seguridad y militares y que daban su acción por concluida a menos que Israel decidiera escalar la situación.

En paralelo a estos acontecimientos, otras voces vienen señalando otros ámbitos de preocupación, como las repercusiones de la violencia en la población civil y en los frágiles equilibrios internos de Líbano, que viene afrontando una situación extremadamente compleja desde antes de estos últimos acontecimientos y antes también del incremento de las hostilidades desde octubre de 2023. Cabe recordar que Líbano ha estado sin presidente por casi dos años y que tras dos años de las elecciones legislativas el gobierno libanés continúa siendo uno provisional, "en funciones". Otro de los aspectos que requiere especial atención es el de la población que ha debido huir de sus hogares, incluyendo la población refugiada siria, desplazada una vez más por la nueva oleada de violencia y hostilidades. Parte de la población afectada ha optado por regresar a su país, pese a la fragilidad de la situación siria, la persistencia del conflicto armado y las perspectivas de detención y/o reclutamiento forzado. Según datos de ACNUR, en pocos días y hasta finales de septiembre más de 11.000 personas habían cruzado la frontera hacia Siria, de las cuales 70% eran de nacionalidad siria y un tercio de origen libanés. Sirios y sirias que han optado por continuar en Líbano han denunciado un trato discriminatorio respecto a los libaneses. Ello, en un contexto en que en los últimos años se han venido acrecentando los discursos xenófobos contra la población refugiada siria, especialmente tras el empeoramiento de la situación económica en Líbano desde 2019.

Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el ELN. Fuente: Misión de Verificación de la ONU en Colombia

COLOMBIA

Las negociaciones entre el Gobierno y el ELN atraviesan la crisis más grave desde su inicio

Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el grupo armado ELN atraviesan un momento de grave crisis después de que el Gobierno de Gustavo Petro decidiera suspender el diálogo con el grupo insurgente el 18 de septiembre, tras un atentado en el departamento de Arauca llevado a cabo por el grupo armado. La suspensión de las negociaciones y la ruptura del alto el fuego acordado por las partes ha generado un escenario incierto sobre el futuro del proceso y los impactos que esta crisis pueda tener en otros procesos de diálogo activos en el país. El atentado contra una base militar causó la muerte de dos soldados e hirió a otros 27, varios de ellos de gravedad y tuvo lugar con posterioridad a otros ataques armados por parte de la guerrilla, fundamentalmente contra infraestructura petrolera. El atentado de Arauca escenificó la ruptura del acuerdo de alto el fuego, cuya vigencia hasta el 3 de agosto después de un año activo, no había sido renovada después de varios meses de crisis en las conversaciones de paz entre Gobierno y ELN. El anuncio de suspensión no conlleva la ruptura definitiva de las negociaciones, como ha señalado el Gobierno, pero sí supone un serio revés para el proceso y la culminación de múltiples episodios de crisis que han debilitado el proceso negociador. El Gobierno colombiano señaló que la reanudación del proceso dependía de que el ELN hiciera "una manifestación inequívoca de su voluntad de paz". Mediante este gesto el Gobierno colombiano ha pretendido dar un golpe de autoridad en un proceso que en los últimos meses había atravesado serias dificultades y momentos de crisis. Las negociaciones estaban congeladas desde el mes de mayo sin que las partes hubieran llevado a cabo reuniones y el alto el fuego estaba suspendido desde el día 3 de agosto, aunque el ELN había señalado que establecía un periodo de 20 días con posterioridad a esta fecha para que se cumpliera su exigencia de ser retirado de la lista de Grupos Armados Organizados.

Con anterioridad a que finalizase la vigencia del alto el fuego, tanto Naciones Unidas como la Iglesia Católica habían hecho un llamamiento a las partes a prorrogarlo por unas semanas para dar tiempo a acordar una solución a la crisis. Si bien el Gobierno respondió de forma positiva a esta petición, el ELN rechazó cambiar su posición mientras no se produjera el cambio con respecto a su calificación como Grupo Armado Organizado (GAO). El ELN señaló que el Gobierno debía haber emitido un

decreto en junio de 2023 retirando al grupo de este listado. Respecto a esta cuestión, la jefa de la delegación negociadora gubernamental, Vera Grabe, señaló que se trataba de un asunto que estaba sobre la mesa, de la misma manera que otros puntos de la agenda, pero que no se podía resolver mediante un ultimátum. Se trata de una cuestión sensible, puesto que la clasificación como GAO establece el nivel de fuerza letal que el DIH permite utilizar contra estos grupos. A mediados de agosto, la delegación negociadora gubernamental hizo llegar al ELN una propuesta confidencial elaborada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para reactivar el diálogo, que posteriormente fue revelada por el propio mandatario, señalando que se les planteó "viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el ELN, que se firmó como primer punto de acuerdo, con el empresariado del país y el movimiento social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación", según declaró el propio presidente en la red X. Esta propuesta fue rechazada por el grupo.

La agudización de la crisis en las negociaciones se produjo como consecuencia del inicio en marzo de conversaciones entre el Gobierno y el Frente Comuneros del Sur, estructura del ELN en Nariño

Las razones de la crisis

La agudización de la crisis en las negociaciones se produjo como consecuencia del inicio en marzo de conversaciones entre el Gobierno y el Frente Comuneros del Sur, estructura del ELN en Nariño. Originariamente, este diálogo se produjo bajo el formato de diálogos regionales de paz, con la participación tanto del Gobierno colombiano como de las autoridades del departamento de Nariño. En mayo Comuneros del Sur anunció su separación del ELN y solicitaron al Gobierno que se formalizara el diálogo y desde el Comisionado de Paz se señaló que el grupo cumplía los requisitos para ser considerados como GAO. Este diálogo fue rechazado por el ELN y su delegación en las negociaciones de paz con el Gobierno, que señaló que se trataba de un diálogo con infiltrados del Gobierno, negando la legitimidad del proceso. El diálogo con Comuneros del Sur debe enmarcarse en la propuesta del gobernador de Nariño de territorialización de la paz, a través de diálogos con diferentes grupos desplegados en los territorios con un enfoque que priorice el contexto local. Esta propuesta se enmarca a su vez en los planteamientos de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro, que busca el diálogo mediante diferentes fórmulas, con los diferentes actores armados que operan en el país, a través del diálogo político o de otras de acceso a la justicia para los grupos vinculados a actividades criminales. El anuncio del diálogo fue considerado una afrenta por parte del ELN y en los meses posteriores desembocó en el congelamiento de los diálogos y finalmente en su suspensión. En paralelo, se produjo la desvinculación de Comuneros del Sur de la estructura del ELN. En los meses posteriores, el diálogo con esta disidencia del ELN ha avanzado y se ha formalizado con el acuerdo sobre una agenda negociadora basada en tres puntos: disminución de la violencia, transformación territorial y reintegración de los combatientes de Comuneros del Sur a la vida civil. Este proceso ha puesto de manifiesto el complejo juego de equilibrios entre los diferentes diálogos abiertos de manera simultánea en el país y cómo las relaciones entre los distintos actores armados pueden afectar, obstaculizar e incluso hacer descarrilar los esfuerzos de paz del Gobierno.

En paralelo al diálogo con en el ELN, el Gobierno mantiene activos diálogos de distinto signo con diferentes grupos armados

Las negociaciones, una carrera de obstáculos

La crisis actual del proceso de paz no es la primera, sino que se inscribe en la compleja trayectoria del diálogo entre el Gobierno y el ELN, que se había reanudado en 2022, en el marco de la política de paz total adoptada por el Ejecutivo de Petro tras su victoria electoral ese mismo año. Durante los meses siguientes se llevaron a cabo varios ciclos de negociación en diferentes países como México, Venezuela y Cuba. En mayo de 2023 se acordó un cese al fuego de carácter bilateral, pactado por un periodo inicial de seis meses y cuya vigencia se inició el 3 de agosto de ese año. Seis meses después del inicio del cese al fuego, el Gobierno de Colombia y el ELN pactaron prorrogar por 180 días el acuerdo. Sin embargo, en los meses posteriores a este pacto de prolongación del cese de la violencia, el proceso de paz atravesó diferentes momentos de crisis que llevaron a que finalmente las partes no lograran consensuar una nueva prórroga del cese de las hostilidades. Tras un comienzo positivo en el que se produjeron avances y acuerdos, las negociaciones se vieron obstaculizadas en varios momentos. El primer episodio de crisis importante fue el que tuvo lugar en octubre de 2023 cuando el ELN secuestró a los padres del futbolista internacional Luis Díaz, manteniendo al padre secuestrado durante 12 días, un hecho que provocó un grave aumento de la tensión en las negociaciones. Si bien la liberación de Luis Manuel Díaz en noviembre permitió la reanudación de las negociaciones en México y que se alcanzaran varios acuerdos, posteriormente se produjeron varios episodios de tensión nuevos. Cabe destacar que tras la liberación del padre del futbolista, ELN y Gobierno lograron un acuerdo sobre la suspensión de los secuestros con fines de extorsión –retenciones con fines económicos, según el ELN–, así como seguir trabajando para crear las condiciones para prolongar el alto el fuego.

Cabe señalar que en paralelo al diálogo con en el ELN, el Gobierno mantiene activos diálogos de distinto signo con diferentes grupos armados. Estos procesos tampoco están exentos de dificultades, como es el caso del

proceso iniciado con el Estado Mayor Central, grupo escindido originariamente de las FARC y que a su vez se ha vuelto a dividir entre quienes se muestran contrarios a un proceso de paz con el Gobierno, liderados por Iván Mordisco, y quienes se mantienen en la mesa, bajo el mando de Calarcá Córdoba. En el caso de los frentes liderados por Iván Mordisco, el Gobierno está llevando a cabo una ofensiva contra el grupo armado tras la ruptura del alto el fuego. Por otra parte, se prevé un segundo ciclo de negociaciones con el grupo armado Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, con quien las negociaciones estarían avanzando.

El apoyo de la sociedad civil y la comunidad internacional al proceso de paz

Si bien el proceso de paz atraviesa un momento crítico, diferentes actores de la sociedad colombiana mostraron su apoyo al diálogo e hicieron llamamientos a las partes a retomar las conversaciones y alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado. En un comunicado público, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, integrada por las organizaciones Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, Casa de la Mujer, Colectivo de Pensamiento y Acción “Mujeres, Paz y Seguridad”, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Mujeres por la Paz y Ruta Pacífica de las Mujeres, hizo un llamamiento a las partes para que retomaran el diálogo y exigieron un cese inmediato de la violencia contra la población civil. Este llamamiento se suma al que hizo la Conferencia Episcopal colombiana y varias diócesis involucradas en el monitoreo del alto el fuego. Otras múltiples organizaciones sociales hicieron también llamamientos a la reanudación del alto el fuego y las negociaciones.

Profesora en un aula destrozada por los bombardeos en Ucrania. Fuente: Save the Children/Anstasiia Zahoskina

RUSIA – UCRANIA

Escalada de violencia y nuevos llamamientos a negociaciones

En los últimos meses se ha producido una escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania de la mano de la presión militar rusa en la provincia de Donetsk; la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, con toma de territorio; y nuevos pasos hacia una mayor militarización. En relación al este ucraniano, las fuerzas rusas intensificaron su ofensiva en Donetsk, tomando varias localidades y avanzando en dirección a Pokrovsk. Fuentes militares ucranianas señalaban al diario Financial Times el marcado incremento de víctimas militares y el riesgo de que el probable asedio a Pokrovsk se convierta en un nuevo Bajmut (en referencia a la batalla entre 2022 y 2023 sobre esa localidad de Donetsk, que causó decenas de miles de víctimas). Pokrovsk es considerado un núcleo estratégico que conecta con otras localidades de Donetsk aún bajo control de Ucrania (Kostiantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk, Sloviansk). La mayor parte de la población de Pokrovsk y la anexa Mirnograd fue evacuada en agosto, aunque unos 18.000 habitantes permanecían en el lugar. En el frente del este, las fuerzas rusas avanzaron también hacia Toretsk y Chasiv Yar e intensificaron el asedio a Vugledar.

Las fuerzas rusas intensificaron su ofensiva en Donetsk, tomando varias localidades y avanzando en dirección a Pokrovsk

Por otra parte, la ofensiva militar continuó también en otras zonas del este, con un incremento de las hostilidades en la región de Járkov, con 712 episodios de "enfrentamientos armados" entre el 1 de julio y el 20 de septiembre según el recuento de ACLED, frente a los 468 registrados en el mismo periodo del trimestre anterior. Respecto al sur, ACLED contabilizó 106 episodios de enfrentamientos armados en la región de Jersón y otros 226 en la región de Zaporiyia entre el 1 de julio y 20 de septiembre. En el conjunto de Ucrania, en ese periodo se produjeron 7.630 episodios de "explosiones y violencia remota" y 4.197 de "combates" (3.950 y 2.445 respectivamente en el mismo periodo del trimestre anterior), según ACLED. Solo en septiembre se produjeron diez oleadas de ataques aéreos rusos con misiles y drones contra la capital. Por otra parte, Ucrania lanzó nuevos ataques con drones contra Rusia, como los del 10 de septiembre contra la región de Moscú.

Asimismo, se produjeron ataques aéreos con graves balances de víctimas civiles y daños en infraestructura civil. Entre ellos, el 26 y 27 de agosto Rusia lanzó una ola de ataques con drones y misiles en múltiples puntos del país, que causaron unas 50 víctimas mortales civiles. Al menos otras nueve personas murieron y 97 resultaron heridas (22 de ellas menores) en ataques aéreos el 30 de agosto en la ciudad de Járkov (segunda mayor ciudad

del país), incluyendo contra un edificio residencial y una zona de juegos. También en Járkov, al menos 47 civiles fueron heridos, incluyendo cinco menores, en un ataque ruso con misiles el 1 de septiembre contra infraestructura civil (centro comercial, complejo de eventos, edificios residenciales). Un ataque contra una academia militar –y un hospital cercano– mató a 58 personas y causó más de 300 heridos, incluyendo militares y civiles, en Poltava (centro) el 3 de septiembre. En Leópolis (oeste), siete civiles murieron, incluyendo tres menores, y otras 64 personas resultaron heridas en un ataque de Rusia con misiles contra la ciudad el 4 de septiembre. Fueron muchos otros los ataques de Rusia en el periodo hasta finales de septiembre. Paralelamente, diferentes ataques ucranianos también causaron víctimas civiles, como 11 heridos en un ataque aéreo contra el distrito de Petrovski (Donetsk) y daños en edificios civiles (centro comercial, hospital, edificio residencial, entre otros). Otras cinco personas murieron y 46 resultaron heridas en ataques aéreos de Ucrania contra Bolgorod (suroeste de Rusia) el 30 de agosto.

La invasión en Kursk, otro foco de escalada

La intensificación de la violencia en los últimos meses se produjo también de la mano de la ofensiva militar terrestre de Ucrania contra la provincia rusa de Kursk, iniciada el 6 de agosto. El comandante en jefe del Ejército de Ucrania, Oleksandr Sirski, señaló que la invasión perseguía evitar el lanzamiento de una nueva ofensiva rusa desde Kursk, desviar tropas rusas de otras zonas, establecer un área de seguridad, tomar prisioneros de guerra y subir la moral de los soldados ucranianos. No obstante, según análisis, pese a la ofensiva Rusia no redujo sus tropas en Donetsk, sino que las trasladó desde otras posiciones y, en paralelo, intensificó su ofensiva en Donetsk. A un mes del inicio de la invasión en Kursk, Ucrania controlaba 1.300 kilómetros cuadrados. Rusia cifró en 130.000 los residentes rusos de la región desplazados por la invasión ucraniana, mientras varios miles permanecían en las localidades tomadas por Ucrania. A finales de agosto la cifra de soldados rusos hechos prisioneros de guerra en Kursk era de 600, según Ucrania. Parte de esos soldados fueron liberados en un intercambio de presos militares el 14 de septiembre (103 de cada bando). En el marco de la ofensiva ucraniana en Kursk 56 civiles rusos murieron y otros 266 resultaron heridos desde su inicio y hasta el 20 de septiembre, según el Ministerio de Exteriores ruso.

Alertan sobre la disminución de fondos para ayuda humanitaria a Ucrania, en contraste con el apoyo militar

En septiembre, Zelenski enmarcó la ofensiva en Kursk como parte integral de su llamado "Plan de la Victoria", con el que busca fortalecer la posición de Ucrania para avanzar hacia un fin de la guerra y "forzar" a Rusia a negociaciones. Uno de los objetivos de Ucrania en ese plan sería retener esas áreas en Kursk e intercambiarlas en futuras negociaciones por territorio de Ucrania ocupados por Rusia.

Escalada militarista y amenaza nuclear

En el tercer trimestre del año se dieron nuevos pasos de militarización. Entre otros, el presidente ruso dio orden de aumentar las filas del Ejército ruso en 180.000 nuevos efectivos, hasta llegar a un volumen de tropas de 1,5 millones de miembros (y 2,4 del conjunto de personal militar). Se trata de la tercera orden de ampliación del Ejército desde el inicio de la invasión, a las que se suma la movilización parcial lanzada en septiembre de 2022. Por otro lado, un foco de tensión fue la cuestión de la demanda de Ucrania a sus aliados occidentales de autorización de uso de armamento de largo alcance contra Rusia dentro de territorio ruso, como los misiles ATACMS (EEUU) o los misiles Storm Shadow/SCALP (franco-británicos y con tecnología estadounidense). La posibilidad de una luz verde generó una escalada retórica en Rusia. El presidente ruso advirtió que en caso de una autorización en esa línea, Moscú pasaría a considerar que los países de la OTAN están en guerra con Rusia y que tomaría medidas en respuesta. Además, anunció la expansión de la doctrina nuclear del país. A finales de septiembre los países aliados de Ucrania no habían autorizado el uso de sus sistemas de misiles de largo alcance contra territorio ruso.

En el ámbito de apoyo externo a Ucrania, la Comisión Europea anunció en septiembre que dará a Ucrania un préstamo de 35.000 millones de euros como parte de un plan del G7 de facilitar 45.000 millones de euros y que se prevén pagar con los beneficios de los activos de Rusia que fueron congelados por las sanciones internacionales. De acuerdo con la UE, será Ucrania la que decida cómo usar esos fondos. Zelenski avanzó que buena parte de esa ayuda se utilizará para ampliar su industria militar. A su vez, EEUU anunció en septiembre un nuevo paquete de 375 millones de dólares en apoyo militar, incluidas municiones en racimo.

Crisis humanitaria

En contraste con los fondos para apoyo militar, Caritas Europa advirtió en junio de que la financiación para ayuda humanitaria a Ucrania estaba disminuyendo de manera alarmante. Esta organización alertó de que donantes como la UE, Alemania y Reino Unido habían ya anunciado "recortes dramáticos de presupuesto" en ese ámbito. Caritas Europa señaló que los fondos del Humanitarian Implementarion Plan previstos para 2024 para Ucrania eran 88,5 millones, en contraste con los 335,4 millones de 2023.

En paralelo, OCHA remarcó en su informe del 17 de septiembre que de los 3.100 millones de dólares requeridos para el Plan de Respuesta Humanitaria de Ucrania, se habían recibido 1.400 millones (45,2%). Según los datos

de OCHA, además de los 14,6 millones de personas en situación de necesidad de apoyo humanitario, 3,67 millones de personas estaban desplazadas internas en el país y otras 6,2 seguían refugiadas en países de Europa.

En su informe de actualización del 20 de septiembre, OCHA alertó del deterioro de la situación humanitaria en las comunidades en la línea de frente, con graves impactos en edificios de viviendas, centros educativos, hospitales, comercios y otras infraestructuras de servicios. Por su parte, UNICEF alertó también de la necesidad de fondos humanitarios para mantener servicios básicos clave para la infancia y avisó de que las disrupciones de energía este próximo invierno tendrían graves impactos en salud física y mental de niños y niñas y en su educación y podrían llevar a cerrar escuelas y afectar la educación online para 1,7 millones de menores.

Ucrania reclamó apoyos para fortalecerse y "forzar" a Rusia a negociar

Perspectivas complejas de negociación

Desde la cumbre suiza por la paz en Ucrania de junio, en los meses siguientes se han producido gestiones diplomáticas y pronunciamientos de diversos actores, con perspectivas inciertas. Ucrania anunció su "Plan de la Victoria" que presentó en septiembre en EEUU al presidente y vicepresidenta de EEUU –y candidata demócrata a las elecciones presidenciales– y al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, así como al Congreso estadounidense y líderes del G7, en el marco del viaje del presidente ucraniano a EEUU para participar en la Asamblea General de la ONU. Según Zelenski, el plan estaría encaminado a fortalecer a Ucrania y "forzar" a Rusia a la mesa negociadora en términos aceptables para Kyiv. El presidente ucraniano también presentó la propuesta como un puente a la siguiente cumbre de paz propuesta para noviembre, así como un plan a implementar antes de fin de año –con el objetivo de recabar el máximo de apoyos posibles antes de la salida de Joe Biden de la Casa Blanca. Según el jefe de la Oficina del Presidente, Andrii Yermak, con el Plan de la Victoria Ucrania busca generar las condiciones que permitan la implementación práctica de la llamada Fórmula de Paz –el plan elaborado por Kyiv a finales de 2022 con los términos de Ucrania para la finalización de la guerra, rechazado por Rusia. Asimismo, Zelenski descartó una finalización de la guerra que congele el conflicto.

Aun sin que hayan trascendido los detalles específicos, según el periódico Financial Times, el "Plan de la Victoria" tendría cuatro puntos, incluyendo mayores garantías de seguridad para Ucrania –semejantes a la defensa mutua que otorga la membresía en la OTAN–, la operación militar de Ucrania en Kursk (Rusia), demandas de sistemas de armamento y el desarrollo conjunto de la economía de Ucrania con sus aliados internacionales. Medios informaron de que el plan incluía la aspiración de entrada en la OTAN –una invitación de entrada en la OTAN, según Yermak. No obstante, en su cumbre de julio la OTAN evitó de nuevo emitir una invitación ni marcó calendarios, supeditándolo a que los países aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones, aunque sí señaló "un camino irreversible" de Ucrania hacia la OTAN.

En estos últimos meses se produjeron otros nuevos llamamientos al diálogo y ofrecimientos de facilitación. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general de la ONU llamó a mayores esfuerzos diplomáticos encaminados a la paz en Ucrania y reafirmó la disposición de la ONU a apoyar esos esfuerzos. En julio el Ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, propuso el establecimiento de una "plataforma de paz" para promover la finalización del conflicto, prevenir una mayor polarización, lograr alta participación y priorizar la diplomacia. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, expresó apoyo a la propuesta. Turquía volvió a ofrecerse en julio como actor facilitador para la búsqueda de una salida al conflicto, mientras Rusia descartó esa opción. En septiembre, en paralelo a la Asamblea General de la ONU, Zelenski y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y sus delegaciones, mantuvieron una reunión a puerta cerrada en la que abordaron la situación de la guerra y los esfuerzos de paz.

Otros movimientos registrados durante el trimestre incluyeron la visita en julio a Kyiv por primera vez desde el inicio de la invasión del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Zelenski rechazó la propuesta de Orbán de considerar primero un alto el fuego con el que empujar posteriores conversaciones de paz. Orbán también viajó posteriormente a Moscú y Pekín, visitas que calificó como "misión de paz". Sus reuniones, realizadas ostentando la presidencia rotatoria húngara del Consejo de la UE, desencadenaron críticas de líderes de la UE, como la presidenta de la Comisión Europea, que negaron que tuviera un mandato de la UE para negociar con Rusia y le exigieron rendición de cuentas. En informes remitidos a órganos y líderes de la UE sobre sus viajes, Orbán señaló que Rusia y China prevén que habrá nuevas conversaciones de paz entre Moscú y Kyiv antes de final de año y defendió que la UE debería lanzar una iniciativa de paz. Por otra parte, Narendra Damodardas Modi, primer ministro indio, se reunió con Zelenski en Kyiv en junio –siendo la primera visita al país de un jefe de gobierno indio–, precedida de una reunión con Putin en Moscú en julio. Modi afirmó la disposición de India a contribuir activamente a la búsqueda de la paz. Trascendió que India había aceptado trasladar un mensaje procedente de Putin a Zelenski. Otros pronunciamientos incluyeron declaraciones en septiembre del presidente checo, Petr Pavel, al New York Times llamando a Ucrania a un enfoque pragmático y realista sobre sus objetivos territoriales.

Se produjeron nuevos ofrecimientos de actores internacionales para avanzar hacia la finalización de la guerra

ÁFRICA

ERITREA – ETIOPÍA (TIGRÉ): Tigré revela contactos entre representantes de esta región etíope y de Eritrea facilitados por EAU

ETIOPÍA – SOMALIA: Continúan las conversaciones entre ambos países para resolver la crisis provocada por el memorando entre Etiopía y Somalilandia

MALÍ: Crisis diplomática con Ucrania tras emboscada rebelde contra fuerzas de seguridad malienses y miembros del grupo Wagner

RDC (ESTE) – RWANDA: Persiste la violencia a pesar de los intentos de establecer un alto el fuego

RDC (ESTE) – RWANDA – UGANDA: El Grupo de Expertos de RDC confirma la presencia de Rwanda en territorio congolés y la colaboración de Uganda con el M23

RWANDA: Paul Kagame obtiene el 99% de los votos en las elecciones presidenciales

SAHEL OCCIDENTAL: Se deteriora la situación de seguridad en la región en medio de la reconfiguración de las alianzas diplomáticas y de seguridad

SUDÁN: Fracasa un nuevo intento de conversaciones de paz para resolver la crisis

SUDÁN DEL SUR: El Gobierno transicional suspende las elecciones presidenciales mientras se complican las negociaciones de paz de Nairobi

ERITREA – ETIOPÍA (TIGRÉ)

Tigré revela contactos entre representantes de esta región etíope y de Eritrea facilitados por EAU

El líder del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), Debretsion Gebremichael, revela la celebración de diversas rondas de contacto no públicas entre representantes de Tigré y del Gobierno de Eritrea iniciadas seis meses atrás en Dubái, capital de EAU. Según Debretsion, el presidente de la Administración Regional Interina (IRA, por sus siglas en inglés) de Tigré, Getachew Reda, representaba al TPLF en Dubái. Sin indicar lugares ni fechas, Debretsion destacó que se habían celebrado diversas reuniones tras el encuentro inicial en Dubái, con el beneplácito del Comité Ejecutivo del TPLF. Además, reveló que el objetivo de estas reuniones era crear un ambiente propicio de cara a promover la confianza y la construcción de la paz entre ambas partes y que han tenido resultados positivos, principalmente en lo concerniente a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas eritreas, entre las que destaca el secuestro de población civil de Tigré, el saqueo de propiedades y otras actividades en el marco de su presencia en la región en apoyo de las Fuerzas Armadas etíopes. En este sentido, el objetivo del TPLF ha sido contribuir a la mejora de las relaciones con sus vecinos, entre los que se incluye a las milicias Fano de la comunidad amhara y el Gobierno eritreo, según ha destacado Debretsion, y bajo este principio, estas reuniones se celebraron con el conocimiento del primer ministro etíope, Abiy Ahmed. Sin embargo, los gobiernos eritreo y etíope no han confirmado la existencia de estas reuniones.

En paralelo, el Departamento de Estado de EEUU ha anunciado la visita a Etiopía de su enviado especial para el Cuerno de África, Mike Hammer, para revisar la implementación del acuerdo de Pretoria, y ha manifestado su compromiso en continuar apoyando a Etiopía y a la administración interina de Tigré para alcanzar una paz duradera, incluyendo un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes, el retorno de la población desplazada así como un proceso de rendición de cuentas y de justicia transicional. El Departamento de Estado también señaló que Hammer se reunirá con otros representantes etíopes para promover esfuerzos que contribuyan al diálogo y el fin de la violencia en las regiones de Amhara y Oromiya. En noviembre de 2022, el Gobierno etíope y el TPLF firmaron el Acuerdo de Cese de Hostilidades en Pretoria (Sudáfrica) con la facilitación de la UA, que incluía el fin de las hostilidades y la retirada de las tropas eritreas y de otras milicias etíopes aliadas de las Fuerzas Armadas etíopes, aunque parte de las tropas eritreas han permanecido en la región.

No obstante, la gradual mejora de las relaciones entre Eritrea y la región etíope de Tigré no ha tenido su reflejo en la crisis entre Eritrea y Etiopía –que firmaron un acuerdo de paz en 2018– que sigue escalando, como se evidenció a principios de septiembre con el cierre de la línea aérea que conectaba las capitales Asmara y Addis Abeba. La apertura de esta línea de la compañía Ethiopian Airlines (EA) –la primera línea comercial que conectaba Eritrea y Etiopía en 20 años tras la firma del acuerdo de paz en 2018–, fue vista como uno de los ejemplos que evidenciaban el inicio del proceso de reconciliación entre ambos. En julio el Gobierno eritreo anunció que no permitiría que esta compañía operara en Eritrea en los próximos meses, y EA decidió suspender la línea el 3 de septiembre aduciendo "condiciones operativas difíciles" ajenas a su voluntad.

ETIOPÍA – SOMALIA

Continúan las conversaciones entre ambos países para resolver la crisis provocada por el memorando entre Etiopía y Somalilandia

Las tensiones y contactos diplomáticos entre Etiopía y Somalia relativos a la crisis provocada por el memorando de entendimiento alcanzado entre Etiopía y Somalilandia continúan. Tras la celebración de la primera ronda de contactos en julio entre Etiopía y Somalia facilitadas por Türkiye, entre el 12 y el 13 de agosto se celebró la segunda ronda de contactos indirectos en Ankara entre el Ministro de Relaciones Exteriores somalí Ahmed Moalim Fiqi y su homólogo etíope Taye Atske Selassie. Aunque surgieron informes de avances positivos, las discusiones terminaron sin acuerdo, ya que tanto Somalia como Etiopía se aferraron a sus posiciones con respecto al acuerdo entre las autoridades etíopes y las de Somalilandia anunciado en enero. En este acuerdo, la autoproclamada República de Somalilandia acordó arrendar parte de su costa a Etiopía a cambio de que Addis Abeba le diera su reconocimiento internacional.

El Ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, dijo en una conferencia de prensa posterior a la segunda ronda de conversaciones que el número de temas discutidos había aumentado significativamente con respecto a la primera ronda y que ahora había "convergencia en algunos principios importantes". Por su parte, el ministro de Exteriores somalí confirmó que se habían logrado avances y que el Gobierno de Mogadiscio estaba buscando un resultado acorde con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Türkiye mantiene estrechos vínculos con Etiopía y Somalia, entrena a las fuerzas de seguridad somalíes y les proporciona asistencia para el desarrollo a cambio de un punto de apoyo en una importante ruta marítima mundial. Sus esfuerzos por resolver la disputa comenzaron después de que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, visitara Ankara en mayo y le pidiera su intervención, según una fuente diplomática turca.Inmediatamente después de las conversaciones, el 14 de agosto, el presidente de Somalia viajó a Egipto para firmar un acuerdo de cooperación en materia de defensa, en señal de los continuos intentos del Gobierno de reforzar el apoyo internacional. Posteriormente, el 27 de agosto, El Cairo entregó equipo militar a Mogadiscio, lo que provocó críticas de Addis Abeba. Mientras tanto, a finales de agosto, el Gobierno somalí comenzó a presionar a las empresas, incluidas las aerolíneas y las compañías de remesas, para que dejaran de usar el nombre de Somalilandia. Para complicar aún más la situación, el Ministro de Exteriores de Somalia, Ahmed Moalim Fiqi, el 12 de septiembre declaró que "la opción de tener contactos con los rebeldes armados en Etiopía, o con los rebeldes que luchan contra el régimen etíope, sigue abierta para Somalia". Sin embargo, aclaró que esa opción aún no se ha considerado.

Somalia y Etiopía acordaron la celebración de una tercera ronda de contactos que empezaría el 17 de septiembre, aunque finalmente fue pospuesta debido a conflictos de programación con la Asamblea General de la ONU y a que el tiempo disponible para preparar las conversaciones era demasiado ajustado. Si bien no se había fijado una nueva fecha para las conversaciones, se esperaba su reanudación después de la conclusión de la Asamblea General de la ONU. El aplazamiento se produjo en medio de un aumento de las tensiones regionales, tras los informes de que Egipto había enviado oficiales militares y equipo pesado a Somalia. Los informes de los medios han sugerido que esta medida podría implicar hasta 10.000 soldados egipcios, lo que también desencadenó voces contrarias en Somalia. En respuesta, el Gobierno etíope emitió una advertencia, afirmando que la transición de la Misión de Transición de la UA en Somalia (ATMIS) a una nueva misión de apoyo a la paz está "plagada de peligros" para la región. Esta misión cuenta con participación militar etíope.

MALÍ

Crisis diplomática con Ucrania tras emboscada rebelde contra fuerzas de seguridad malienses y miembros del Grupo Wagner

A finales de julio se produjo un incidente en el norte de Malí que ha provocado una crisis diplomática con Ucrania. Entre los días 25 y 28 de julio tuvo lugar en Tinzaouatène, cerca de la frontera con Argelia, en el norte de Malí, una emboscada protagonizada por rebeldes tuareg y Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), vinculado con al-Qaeda, contra fuerzas malienses apoyadas por miembros de la compañía privada de seguridad rusa, Grupo Wagner. La emboscada, según anunciaron los rebeldes de la alianza Marco Estratégico para la Defensa del Pueblo de Azawad (CSP-DPA), se saldó con al menos 84 miembros de Wagner y 47 soldados malienses muertos, provocando a su vez decenas de heridos. La coalición rebelde informó que utilizó armas pesadas, aviones no tripulados y suicidas en su emboscada. Tras días de versiones contradictorias de lo ocurrido, Wagner admitió que 80 mercenarios y soldados malienses murieron en el ataque, incluido un comandante ruso. Tras el incidente, Andriy Yusov, portavoz de la agencia de espionaje militar de Ucrania (GUR), declaró que "los rebeldes recibieron información necesaria, y no solo información, que permitió una operación militar exitosa contra los criminales de guerra rusos". Estas declaraciones provocaron que la Junta Militar de Malí rompiera relaciones diplomáticas con Ucrania y, posteriormente, hiciera lo mismo la junta militar de Níger, acusando a Ucrania de dar apoyo a los grupos involucrados en los combates en Malí. Ucrania negó cualquier participación en los combates en el norte de Malí y describió la decisión de Malí y Níger de romper relaciones diplomáticas por el incidente como "miope y precipitada". El 19 de agosto la Alianza de Estados

del Sahel (AES) solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU tomar medidas adecuadas contra lo que calificó de "acciones subversivas" por parte de Ucrania, acusándolo de apoyar el terrorismo internacional en el Sahel.

RDC (ESTE) – RWANDA

Persiste la violencia a pesar de los intentos de establecer un alto el fuego

Persisten los enfrentamientos a pesar de los intentos de establecer un alto el fuego entre las Fuerzas Armadas y las milicias aliadas locales denominadas Wazalendo y el grupo armado M23 y Rwanda. El 5 de julio entró en vigor un alto el fuego humanitario entre las Fuerzas Armadas congolesas y el grupo armado M23 durante dos semanas impulsado por EEUU y Angola que fue violado una semana después con el estallido de nuevos enfrentamientos en el territorio de Masisi, a pocas decenas de kilómetros de Goma, la capital de Kivu Norte, según informaciones de la ONU. En sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU, los tres miembros africanos del Consejo de Seguridad (A3+) declararon su preocupación por los riesgos para la protección de los civiles que plantea la existencia de más de siete millones de personas desplazadas por la violencia asociada a este conflicto. La organización regional EAC hizo un llamamiento a la extensión de esta tregua.

Posteriormente, cuando expiraba esta tregua humanitaria, el 4 de agosto, Angola (país designado por la UA para facilitar las conversaciones de paz entre RDC y Rwanda) anunció la firma un nuevo alto el fuego temporal entre ambos países que fue nuevamente violado a los pocos días por el M23, lo que pone de manifiesto la fragilidad de la situación y la ausencia de voluntad política de cara a cumplir los compromisos alcanzados. El acuerdo, firmado por los ministros de Exteriores de Rwanda y de RDC y auspiciado por el presidente de Angola, Joao Lourenço, evidenció también la implicación de Rwanda en las hostilidades.

A la vez, las tropas de la misión SAMIDRC, de la organización regional SADC, se están viendo incapaces de frenar las acciones del grupo armado M23 y de Rwanda, cuya presencia en RDC ha confirmado la ONU. No obstante, el hecho de que el proceso de Luanda no incluya al M23 también evidencia que Rwanda puede firmar un acuerdo de cese de hostilidades sin que implique que el M23 vaya a cumplirlo. En este sentido, más allá de que el Gobierno congolés se ha visto incapaz de dialogar con el M23, el proceso de Nairobi (impulsado por la EAC, en el que se pretendía promover un diálogo entre el Gobierno congolés y el centenar de grupos armados presente en el este de RDC, en especial el M23) se vio obstaculizado por las tensiones entre RDC y Kenya tras la conferencia de prensa celebrada en Nairobi en diciembre de 2023, donde se presentó una nueva coalición político-militar llamada Alliance Fleuve Congo (AFC), que incluía diversos grupos armados, entre ellos el M23.

El 14 de septiembre las partes se reunieron nuevamente en Luanda para discutir los avances en la implementación del acuerdo alcanzado el 4 de agosto, principalmente en lo concerniente a la neutralización del grupo armado FDLR (parte de cuyos responsables participaron en el genocidio de 1994 y que continúa siendo considerado una amenaza para Rwanda) y la retirada de las tropas de Rwanda. El plan de neutralización de las FDLR, presentado por Kinshasa, fue armonizado en las reuniones celebradas el 7 y 8 de agosto, centrado en la necesidad de reforzar el mecanismo de verificación ad hoc con la integración de expertos de los tres países. También se discutió la posibilidad de implicar a otros actores para garantizar el alto el fuego en vigor desde el 4 de agosto. Sin embargo, no se ha producido ningún avance en lo concerniente a la retirada de las tropas rwandesas de territorio congolés, prioridad de RDC, así como la interrupción del apoyo de Kigali al M23, que sigue llevando a cabo ofensivas y ampliando el territorio bajo su control, en especial en el territorio de Lubero, a unos 200 km de Goma, además del territorio de Masisi (Kivu Norte), y también en la provincia de Kivu Sur. Aunque sobre el terreno los cambios son constantes, desde junio y julio el M23 controla las localidades estratégicas de Sake (a 25 km de Goma) y Kanyabayonga (en el territorio de Lubero, a un centenar de km entre la capital de Lubero y de Goma). Kanyabayonga, de unos 60.000 habitantes (que incluyen decenas de miles de desplazados de la zona) es una ciudad situada en el estratégico eje de comunicación hacia el norte de Kivu Norte y la región de Ituri, conectando Goma con Beni y Butembo.

RDC (ESTE) – RWANDA – UGANDA

El Grupo de Expertos de RDC confirma la presencia de Rwanda en territorio congolés y la colaboración de Uganda con el M23

El Grupo de Expertos de la ONU en RDC confirma la presencia de miles de soldados rwandeses combatiendo junto al grupo armado M23 –grupo que está controlado por parte del Gobierno rwandés– así como el apoyo de Uganda a este grupo armado tutsi congolés. El representante especial del secretario general de la ONU en RDC reveló en julio que entre 3.000 y 4.000 soldados rwandeses combaten en territorio congolés junto al M23, indicando que Kigali ejerce el control de facto sobre las operaciones del grupo. Esta revelación, el hecho de que el presidente Paul Kagame no niegue explícitamente la presencia de tropas rwandesas en RDC y la firma del alto el fuego entre RDC y Rwanda en agosto, pone de manifiesto que Rwanda es un actor beligerante en esta contienda, hecho que queda confirmado con la presencia rwandesa en territorio congolés. En este sentido, la ministra de Exteriores congolesa manifestó que la situación en RDC se ha deteriorado gravemente en los últimos meses, que la entrada de estos 4.000 soldados ha provocado una escalada de la crisis de desplazamiento masivo que afecta al este de RDC y que ante estos elementos, cabe

preguntarse porqué Rwanda no está siendo sancionada por su presencia en territorio congolés.

En paralelo, el Grupo de Expertos de la ONU en RDC ha afirmado que desde el resurgimiento de la crisis del M23 a finales de 2021, Uganda ha colaborado con el grupo armado M23. En concreto, Uganda no ha impedido la presencia de tropas del M23 y de las Fuerzas Armadas de Rwanda (RDF, por sus siglas en inglés) en su territorio ni su paso por él, afirma el informe de la ONU, que se envió al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU en abril y a los miembros del Consejo de Seguridad en junio. El grupo de la ONU también declaróque había obtenido pruebas que confirmaban el apoyo activo al M23 por parte de funcionarios del Ejército de Uganda (UPDF, por sus siglas en inglés) y de la inteligencia militar, y que los líderes del M23 viajaban a Uganda para reunirse. El portavoz adjunto de las UPDF, Deo Akiiki, dijo a la agencia Reuters que esos informes acusan falsamente al Ejército ugandés cuando su relación con las fuerzas de la RDC está en su mejor momento. En este sentido, Uganda sigue llevando a cabo operaciones conjuntas con las tropas de la RDC contra el grupo rebelde ugandés ADF presente en la zona fronteriza entre Uganda y RDC, en el norte de la provincia congolesa de Kivu Norte, a un centenar de km del radio de operaciones del M23. Además, las tropas ugandesas formaban parte de una fuerza regional desplegada en noviembre de 2022 para supervisar un alto el fuego con el M23. Las autoridades congolesas pidieron la retirada de la fuerza el año pasado, alegando que era ineficaz.

RWANDA

Paul Kagame obtiene el 99% de los votos en las elecciones presidenciales

En las elecciones presidenciales de Rwanda del 15 julio el candidato y presidente en funciones, Paul Kagame, obtiene un 99% de los votos, superando sus registros de 2017, 2010 y 2003, lo que le permitirá gobernar por otros siete años. Kagame es el hombre fuerte del país desde 1994 y lo gobierna de forma autoritaria desde el año 2000. En 2015 celebró un referéndum que ganó y por el que modificó el límite de mandatos presidenciales, lo que le permite presentarse hasta 2034. Aunque no es obligatorio votar, la participación en los comicios ha sido del 98%. La comisión electoral prohibió la participación en las elecciones a tres candidatos, las voces más críticas del país, entre ellas Victoire Ingabire, al frente del partido Democracy and Liberty For All, que estuvo en prisión entre 2010 y 2018, acusada de amenazas a la seguridad del Estado y de negar la existencia del genocidio rwandés, entre otras cuestiones. La denegación se motivó debido a que las personas que han estado más de seis meses en prisión en Rwanda no pueden ser elegibles, decisión que fue denunciada por Ingabire como políticamente motivada. Otra de las voces críticas a las que se prohibió su candidatura fue a Diane Rigwara, del partido People Salvation Movement, que también ha estado en prisión, y cuya candidatura no obtuvo los 600 apoyos ciudadanos necesarios, según el Gobierno. Por último, la candidatura de Bernard Ntaganda, líder del Social Party, también fue prohibida por haber estado en prisión –en 2010 fue sentenciado a cuatro años acusado de amenazar a la seguridad del Estado y de incitar la división étnica, entre otras cuestiones.

En 2024 Rwanda ha cumplido 30 años del genocidio que marcó la historia africana y mundial y que se convirtió en uno de los fracasos más importantes de la comunidad internacional. Durante la campaña electoral, Kagame utilizó de forma populista la "amenaza externa" congolesa en sus discursos para aglutinar el apoyo de la población. Numerosos análisis han evidenciado la persecución que sufre la oposición política y social en el país.

SAHEL OCCIDENTAL

Se deteriora la situación de seguridad en la región en medio de la reconfiguración de las alianzas diplomáticas y de seguridad

El 6 de julio los jefes de Estado de Malí, Burkina Faso y Níger formalizan en una cumbre en Niamey su decisión de abandonar el bloque regional de África Occidental (CEDEAO) y formar la "confederación" Alianza de Estados del Sahel (AES, por sus siglas en francés). Un día después, en la cumbre de la CEDEAO celebrada en Nigeria, sus líderes advirtieron de una posible "desintegración" si la AES abandonaba formalmente el bloque, anunciando que hasta que la AES siga los procedimientos formales, la CEDEAO considera que Burkina Faso, Malí y Níger seguirán formando parte del bloque supranacional. No obstante, la CEDEAO se reservó el derecho de establecer requisitos de visado para los ciudadanos de los países AES si se reconoce la ruptura.

Por otro lado, en relación con la reestructuración del complejo internacional de seguridad en la región, el 6 de julio el Gobierno alemán anunció el cese de sus operaciones en su base aérea de Níger para el 31 de agosto, tras las infructuosas negociaciones con la Junta Militar del país. Alemania había operado en Níger desde febrero de 2016, llegando a albergar a unos 3.200 efectivos. Asimismo, el 16 de septiembre, el ejército estadounidense anunció que había completado la retirada de Níger de sus casi 1.000 efectivos, poniendo fin a más de una década de presencia militar estadounidense en el país. La retirada se produjo en diferentes etapas: primero, a principios de julio el Ministerio de Defensa de Níger y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunciaron, en una declaración conjunta, el retiro de fuerzas y equipos de la Base Aérea 101 en Niamey y, a principios de agosto, se produjo la retirada de los efectivos de la Base Aérea 201 en Agadez, completando la retirada antes de la fecha límite dada por la junta militar nigerina del 15 de

septiembre. De forma paralela, Malí, Níger y Burkina Faso anunciaron un nuevo acuerdo con Rusia, que en este caso les permitirá adquirir satélites de telecomunicaciones y vigilancia. Rusia ha ampliado su presencia en África, especialmente en el Sahel, desde que se rompieron las relaciones entre estos países y sus aliados occidentales.

La retirada de las tropas occidentales y la mayor presencia rusa en la región coincide con un aumento de la violencia provocada por los grupos yihadistas, principalmente por Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), vinculado con al-Qaeda, que, según un informe del Equipo de Monitoreo de Sanciones de la ONU, se ha convertido en "la amenaza más significativa en el Sahel". El informe también advierte que la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP), que opera principalmente en Nigeria, "ha crecido en importancia como en capacidad", centrado su atención en apoyar al Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) que opera en Malí y las regiones fronterizas de Burkina Faso y Níger.

El incremento de la violencia y la inestabilidad en la región se observó, por ejemplo, en dos eventos registrados en el trimestre, uno en Burkina Faso y otro en Malí, que cuestionan seriamente la estrategia de seguridad que están llevando a cabo las juntas militares en la región para contener la violencia. En Burkina Faso, el 24 de agosto se registró uno de los peores episodios de violencia que ha sufrido el país en su historia reciente cuando JNIM atacó una comunidad en Barsalogho (región centro-norte) que provocó la muerte de al menos 200 personas según el Gobierno, aunque un grupo de víctimas de Barsalogho -Colectivo de Justicia para Barsalogho (CJB)- denunció que el ataque dejó al menos 400 personas asesinadas. El ataque se produjo cuando residentes de la ciudad cavaban trincheras defensivas por orden del Ejército. El capitán Ibrahim Traoré, líder de la Junta Militar burkinesa, había ordenado en el mes de mayo a los civiles que cavaran trincheras para proteger los puestos de seguridad, pero a muchos residentes de Barsalogho les preocupaba que esta medida provocara violencia por parte de los yihadistas, que han mantenido la zona bajo bloqueo durante al menos dos años. El 11 de septiembre, el primer ministro burkinés, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, reconoció la tragedia de Barsalogho, cuestionando que no se hubieran seguido las instrucciones dadas por el líder de la junta de proteger a la población.

Por otro lado, en Malí, el 17 de septiembre JNIM provocó un ataque en Bamako, la capital, contra un campo de entrenamiento de la policía militar y una base aérea militar en el distrito de Feladié que dejó, según datos oficiales, más de 70 muertos y 200 heridos, aunque un documento oficial confidencial autentificado cifra el saldo en alrededor de 100 e identifica a 81 víctimas. En un vídeo del ataque publicado por JNIM, ofrece indicios de que los militantes habrían incendiado el avión presidencial. Estos ataques en Bamako, que representan una de las pérdidas recientes más graves sufridas por las fuerzas de seguridad malienses, fueron los primeros de este tipo en años y han puesto en tela de juicio la estrategia militar de la Junta y sus afirmaciones de que la situación de seguridad está bajo control.

SUDÁN

Fracasa un nuevo intento de conversaciones de paz para resolver la crisis

Entre el 14 y el 16 de agosto tiene lugar en Ginebra, Suiza, una nueva ronda de negociaciones de paz destinadas a poner fin a la guerra en Sudán. Las conversaciones fueron lideradas por Estados Unidos y organizadas juntamente con Arabia Saudita y Suiza, mientras que la Unión Africana, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y las Naciones Unidas completaron el llamado Grupo Alineado para el Avance de la Vida y la Paz en Sudán (ALPS). El objetivo de las negociaciones estaba centrado en lograr un alto el fuego y garantizar el acceso humanitario. Sin embargo, al encuentro solo se presentó la delegación de los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), mientras que el Ejército (FAS) no asistió. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán había establecido previamente las condiciones para participar en las conversaciones de paz en Suiza, que incluían consultas previas sobre la agenda y quién podría asistir a las mismas, resaltando que las RSF debían ser obligadas previamente a retirarse de las ciudades y pueblos y poner fin a los ataques contra civiles, como requisito previo para cualquier conversación de paz. La no presencia del Ejército impidió lograr un acuerdo para un alto el fuego, pero las negociaciones sirvieron para avanzar en tratar de asegurar el acceso de la ayuda humanitaria en dos rutas clave hacia el país.

El estancamiento de las negociaciones agravó aún más la grave situación humanitaria en Sudán, donde millones de personas necesitan asistencia urgente. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que aproximadamente una de cada cinco personas ha sido desplazada en Sudán, con 10,7 millones de personas desplazadas internamente y 2,3 millones que han huido a través de las fronteras, e instó a los países a aumentar sus donaciones en respuesta a la mayor crisis de desplazamiento del mundo. La OIM denunció que ha recibido solo el 21% del apoyo que necesita para proporcionar ayuda crucial a una población asolada por el conflicto y que también se enfrentan al hambre, las enfermedades y las inundaciones.

SUDÁN DEL SUR

El Gobierno transicional suspende las elecciones presidenciales mientras se complican las negociaciones de paz de Nairobi

La inestabilidad persiste en Sudán del Sur después de que el Gobierno de transición informara el 13 de septiembre de la suspensión de las elecciones presidenciales

previstas para el 22 de diciembre de 2024 y la extensión del periodo transicional por dos años más. La suspensión representa un nuevo aplazamiento electoral, después del realizado en febrero de 2023. En ambos casos, el Ejecutivo sursudanés lo ha justificado debido a que no había cumplido con las disposiciones clave del acuerdo de paz de 2018 (R-ARCSS). Dicho acuerdo de paz, firmado por el presidente Salva Kiir y el ex líder rebelde y actual primer vicepresidente Riek Machar, había allanado el camino a la paz con la conformación de un gobierno de coalición de transición y establecido una hoja de ruta para la celebración de elecciones generales, que incluía la redacción de una nueva Constitución o la unificación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, después de varias prórrogas, el acuerdo volvió a expirar sin haber logrado ninguno de los objetivos previstos. Antes de la suspensión oficial de las elecciones presidenciales que debían poner fin al proceso transicional, múltiples actores, entre ellos la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), las instituciones electorales del país o grupos de la sociedad civil sursudaneses, habían alertado que el país no había logrado generar las condiciones adecuadas para su celebración.

Tras el anuncio de la nueva prórroga del período de transición hasta febrero de 2027, la ONU, si bien ratificó su respaldo al país, Nicholas Haysom, jefe de la UNMISS, expresó su profundo pesar, señalando que la misma cuestión se planteó hace dos años y la ONU dio su apoyo con la condición de que no hubiera más prórrogas. La denominada Troika, compuesta por Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, expresó también su "profunda preocupación" por el anuncio de un retraso de dos años en las elecciones, calificando de "fracaso" la prolongación del mandato del gobierno de transición. Los tres países reconocieron que las elecciones no pudieron celebrarse como estaba previsto en diciembre y culparon la falta de voluntad política del Gobierno.

La suspensión de las elecciones y la ampliación del proceso transicional podría afectar a las negociaciones de paz en Nairobi que el gobierno sursudanés mantiene con los grupos armados y opositores no signatarios del R-ARCSS organizados en la South Sudan Opposition Movements Alliance (SSOMA). Estas negociaciones, que durante un tiempo se habían desarrollado en Roma sin lograr avances sustanciales, se trasladaron a principios de año a Nairobi, bajo la mediación del Gobierno de Kenya. En el mes de julio, el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (SPLM-IO) encabezado por Machar, había anunciado su retirada de las conversaciones en Nairobi desacuerdos con la creación de diferentes estructuras que, a su parecer, socaban las establecidas en el acuerdo de paz de 2018. En la denominada Iniciativa Tumaini, se acordó en mayo la creación de un Consejo Nacional de Liderazgo (NLC) que, según el SPLM-IO, otorgaría un poder sin control, superando potencialmente a órganos constitucionales como la Presidencia, el Consejo de Ministros, la Legislatura Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional. El SPLM-IO teme perder la garantía de que su partido reciba el 28% de los puestos del gabinete, el 23% de los escaños en el Parlamento nacional y el 27% de los puestos gubernamentales a nivel estatal, tal y como establece el R-ARCSS. A pesar de la retirada del partido de Machar, el Gobierno y SSOMA han seguido discutiendo los mecanismos de implementación y retomaron las conversaciones a mediados de agosto.

AMÉRICA

VENEZUELA: Organismos internacionales denuncian falta de transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales y represión de las posteriores protestas

VENEZUELA

Organismos internacionales denuncian falta de transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales y represión de las posteriores protestas

27 personas murieron, unas 200 resultaron heridas y más de 2.400 fueron detenidas en el marco de las protestas masivas que se produjeron en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó como vencedor a Nicolás Maduro (52% de los votos) frente al principal candidato opositor, Edmundo González (43%), decisión que fue ratificada a finales de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia. La líder de la oposición, María Corina Machado, que no pudo concurrir a los comicios por estar inhabilitada, denunció un fraude masivo en las elecciones y declaró que González había ganado con alrededor del 70% de los votos, imponiéndose en todos los estados del país. A principios de agosto, la oposición publicó las actas electorales escaneadas del 83,5% de las mesas de votación, pero el Gobierno declaró que estas eran falsas y que el hecho de hacer públicas las actas

usurpaba las funciones de las autoridades electorales. Tras las elecciones, el Centro Carter, que había enviado una misión de observación invitada por el Gobierno, declaró que las elecciones no habían cumplido con los estándares internacionales de credibilidad y que no podían ser consideradas democráticas. En la misma línea, el informe provisional del Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas señaló, entre otras cuestiones, que las elecciones carecieron de las medidas básicas de transparencia e integridad para poder considerarlas creíbles. Asimismo, a principios de agosto, declaró que la falta de publicación de resultados por parte de las autoridades no tenía precedentes en la celebración de elecciones democráticas contemporáneas. De igual modo, numerosos gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales, como Naciones Unidas, la OEA o la UE, pusieron en duda la veracidad de los resultados e instaron a las autoridades a que publicaran las actas electorales de cada mesa de votación. A finales de septiembre, durante la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, más de 30 países firmaron una declaración en la que afirman que González logró la mayoría de los votos según los datos disponibles, aunque sin llegar a reconocer a este como presidente electo de Venezuela.

Caracas rechazó todas las peticiones de publicación de resultados y llamó a consultas a los embajadores de varios países latinoamericanos que habían pedido mayor transparencia

Caracas rechazó todas las peticiones de publicación de resultados y llamó a consultas a los embajadores de varios países latinoamericanos que habían pedido mayor transparencia. Además, el propio Maduro acusó a la oposición, en particular a Machado y González, de ser los artífices de un intento de golpe de Estado y pidió penas de prisión para ambos. El Gobierno venezolano tampoco aceptó ninguna de las propuestas de los países que intentaron impulsar una solución negociada a la crisis (Brasil, Colombia y México), como una repetición electoral (previo establecimiento de un consejo electoral con participación de la oposición) o la conformación de un gobierno de coalición. La Fiscalía abrió una investigación contra la oposición por la publicación de datos del recuento, acusándoles de delitos como falsedad documental e instigación a la desobediencia. A principios de septiembre, el Gobierno español concedió asilo político a Edmundo González, que previamente había permanecido unos días en la embajada holandesa en Caracas y en la residencia del embajador español. Machado denunció que González había sufrido un terrible hostigamiento y amenazas a su vida. Además, durante una intervención virtual en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrada a finales de septiembre, Machado denunció que todas las personas que tuvieron responsabilidad directa en el cuestionamiento de los resultados electorales se hallaban actualmente en la clandestinidad, el exilio o la cárcel. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que conversó directamente con Nicolás Maduro sobre la situación política del país, ofreció la mediación y buenos oficios de la organización, siempre y cuando las partes lo acuerden y lo pidan. De igual modo, Guterres expresó su preocupación, tanto por los resultados de los comicios como por los informes de violencia poselectoral y violaciones de derechos humanos. Entre ellos, cabe destacar el informe que presentó a mediados de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Dicha misión impulsada por Naciones Unidas, denunció un elevado riesgo de desintegración del Estado, señaló que la represión contra los opositores alcanzó niveles sin precedentes y denunció que la comisión de violaciones de derechos humanos podría constituir crímenes de lesa humanidad. Entre las violaciones que se han podido documentar se encuentra la muerte de personas que participaban en protestas, detenciones arbitrarias y violaciones graves de los procesos judiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. La misión de la ONU ha documentado al menos 25 muertos por la represión policial en las protestas antigubernamentales, aunque la Fiscalía General considera que la oposición es la principal responsable de dichas muertes. El informe de Naciones Unidas describe una estructura represiva del Estado que involucran a varios actores, como el propio presidente Maduro, las fuerzas de seguridad del Estado, las autoridades judiciales, la autoridad electoral e incluso la Asamblea Nacional. Por su parte, a mediados de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó prácticas que tildó de terrorismo de Estado, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política.

ASIA y EL PACÍFICO

AFGANISTÁN: Se agravan las violaciones a los derechos de las mujeres y se intensifica el llamamiento al reconocimiento del Apartheid de género como crimen internacional

BANGLADESH: Las protestas ciudadanas fuerzan la dimisión de la primera ministra y el nombramiento de un gobierno interino en la crisis política más grave del país de los últimos años

FILIPINAS: El Gobierno y el NDFP hacen un llamamiento a la reanudación de las conversaciones formales

PAPÚA NUEVA GUINEA: Designan a un nuevo mediador de Naciones Unidas en las negociaciones sobre la independencia de la isla de Bougainville

AFGANISTÁN

Se agravan las violaciones a los derechos de las mujeres y se intensifica el llamamiento al reconocimiento del Apartheid de género como crimen internacional

Se agravan las violaciones de derechos humanos de las mujeres por parte del Gobierno talibán, al tiempo que cobra fuerza la campaña internacional para que el "apartheid de género" sea considerado como un crimen por el derecho internacional. En agosto, el Gobierno aprobó una nueva ley "Para la promoción de la virtud y la prevención del vicio", en la que se refuerzan las restricciones a la libertad de las mujeres, incluyendo la prohibición de hablar en voz alta en público, además de otras muchas limitaciones. La aprobación de esta legislación se produjo en un contexto de críticas a la comunidad internacional por su pasividad y utilización de la cuestión de los derechos de las mujeres tras la reunión de Doha III en la que se accedió a las exigencias talibanes de restricción a la participación de las mujeres en dicha reunión, así como la exclusión de la cuestión de sus derechos de la agenda. En septiembre tuvo lugar en Tirana, Albania, la cumbre de Todas las Mujeres Afganas (All Afghan Women), que contó con la participación de 130 mujeres, en su mayoría exiliadas afganas, pero también de algunas que se desplazaron desde Afganistán. La cumbre tenía como objetivo impulsar la participación de las mujeres en las iniciativas internacionales sobre el país, en respuesta a su exclusión de los foros internacionales diplomáticos. Las organizadoras señalaron que su prioridad había sido organizar el encuentro en un país mayoritariamente musulmán, pero que países como Turquía o los Emiratos Árabes Unidos habían rechazado acoger la reunión. La reunión concluyó con un acuerdo de 12 puntos en el que se incluye, entre otras cuestiones, un llamamiento a la comunidad internacional a no reconocer al régimen mientras no se reviertan las restricciones a los derechos de las mujeres, así como un reconocimiento de las políticas de apartheid de género como crimen de lesa humanidad. Además, también se exige una mayor participación de las mujeres afganas en la priorización y distribución de ayuda humanitaria. En paralelo, se intensificó la campaña para el reconocimiento del apartheid de género como un crimen internacional y diferentes organizaciones de derechos humanos argumentaron la necesidad de esta medida, que establecería una denominación específica para una forma concreta de opresión institucionalizada contra las mujeres. Amnistía Internacional señaló que el apartheid de género hacía referencia a un patrón institucionalizado de dominación y opresión sistémica con base en el género y que permitiría amplificar lo comprendido por el crimen de persecución de género ya contemplado por el derecho internacional.

BANGLADESH

Las protestas ciudadanas fuerzan la dimisión de la primera ministra y el nombramiento de un gobierno interino en la crisis política más grave del país de los últimos años

La primera ministra de Bangladesh, Sheik Hasina, se vio forzada a dimitir tras semanas de intensas protestas sociales que derivaron en enfrentamientos violentos con la policía en los que podrían haber muerto más de 600 personas, según Naciones Unidas. Las protestas se iniciaron por parte de grupos de estudiantes en rechazo de la reinstauración por parte de la Corte Suprema del país de un sistema de cuotas que reservaba un 30% de los puestos de funcionariado para descendientes de los participantes en la Guerra de Liberación de Bangladesh, que finalizó con la independencia del país. El importante crecimiento económico del país, como consecuencia del enorme crecimiento de la industria textil bangladeshí –uno de los principales abastecedores del mercado textil internacional– no ha derivado en una mejora del mercado laboral para los estudiantes universitarios, puesto que

Fuente: Rayhan Ahmed

las trabajadoras de esta industria son fundamentalmente mujeres con sueldos muy reducidos y condiciones de trabajo muy precarias. Así pues, las organizaciones de estudiantes reclamaron la eliminación de la cuota y las protestas fueron en aumento ante el desprecio de la primera ministra por el movimiento estudiantil –llegando a calificar a los estudiantes de ser los descendientes de los colaboracionistas con Pakistán en la independencia–, registrándose ataques violentos por parte de organizaciones próximas al Gobierno y el cierre de todos los centros educativos.

La muerte de 20 estudiantes como consecuencia de la represión policial el 18 de julio llevó a que finalmente se iniciaran negociaciones con el Gobierno el 19 de julio y a que dos días después la Corte Suprema redujera la cuota al 7%. Sin embargo, las protestas persistieron y fueron aumentando con la participación de otros sectores de la sociedad civil. A principios de agosto se reanudaron los enfrentamientos entre policía y manifestantes y el 3 de agosto el movimiento estudiantil señaló que su única demanda era la dimisión de la primera ministra Hasina. Cientos de miles de personas se manifestaron en Dhaka el 5 de agosto en la conocida como "marcha a Dhaka". El jefe de las Fuerzas Armadas se negó a actuar contra los manifestantes con más contundencia, forzando la dimisión y posterior abandono del país por parte de Hasina, que se refugió en la India. Tras la marcha de Hasina se llevó a cabo la disolución del Parlamento por parte del presidente Muhammad Shahabuddin Chuppu. Las negociaciones entre el presidente, las Fuerzas Armadas y representantes estudiantiles finalizaron con un acuerdo para la conformación de un gobierno interino encabezado por el economista y Premio Nobel, Muhammad Yunus, que liderará el país hasta la celebración de elecciones. Según la Constitución las elecciones deberán tener lugar 90 días después de la disolución del Parlamento. El nuevo Gobierno tiene el reto de garantizar una transición democrática y unas elecciones libres, ya que en la última década los procesos electorales han estado marcados por la violencia, el boicot por parte de la oposición y acusaciones de fraude. Tras su nombramiento, el Ejecutivo –que incluyó en sus cargos a algunos representantes estudiantiles– se comprometió con una agenda de reformas económicas, electorales, judiciales y mediáticas, aunque limitada por el mandato interino. Así, se sustituyó a los jefes de la Corte Suprema y del Banco de Bangladesh y el país se adhirió a la convención sobre desapariciones forzosas. No obstante, la tensión política y las protestas, aunque de menor intensidad, persistieron tras el nombramiento del nuevo Gobierno y muchas instituciones educativas no habían recuperado el funcionamiento normal debido a la destitución de las direcciones. La oposición exigió un calendario electoral, que casi dos meses después del nombramiento del Gobierno interino no había sido presentado. El jefe de las Fuerzas Armadas señaló que respaldaban al Gobierno interino y se mantendrían al margen de la política, apuntando también a un periodo de transición de 18 meses.

FILIPINAS

El Gobierno y el NDFP hacen un llamamiento a la reanudación de las conversaciones formales

El Consejero Presidencial sobre Paz, Reconciliación y Unidad, Carlito Gálvez, declara a principios de septiembre su optimismo acerca de la posibilidad de alcanzar e incluso empezar a implementar un acuerdo de paz definitivo con el Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP, por sus siglas en inglés) durante el mandato del actual presidente, Ferdinand Marcos. Gálvez reconoció que ha habido conversaciones exploratorias ininterrumpidas entre las partes tras la firma de un comunicado conjunto el 28 de noviembre de 2023 en el que, tras un impasse de siete años, el Gobierno y el NDFP se comprometían a reanudar las conversaciones de paz para intentar poner fin a un conflicto armado que se inició a finales de los años 60 y a abordar las causas estructurales que dieron lugar al mismo. Gálvez también declaró la disposición del Gobierno a eliminar las condiciones que dificultan o hipotecan el avance del proceso de paz. Pocos días después de dichas declaraciones, tanto el Partido Comunista de Filipinas como la presidenta del panel negociador del NDFP, Juliet de Lima, hicieron un llamamiento a la continuación de las conversaciones exploratorias y a la reanudación de las negociaciones oficiales. Según De Lima, las conversaciones que han mantenido desde finales de 2023 tienen el objetivo de acordar un marco negociador que permita lograr un acuerdo de paz que aborde las causas profundas del conflicto. De Lima mostró la disposición del NDFP —organización que aglutina a varias organizaciones de inspiración comunista y que incluye al Partido Comunista de Filipinas y a su brazo armado, el Nuevo Partido del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés)—a reanudar las negociaciones oficiales, que deberían abordar cuestiones como la reforma agraria o la industrialización nacional.

Sin embargo, la presidenta del panel negociador del NDFP también señaló que algunos estamentos del Estado, como el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), se oponen a dichas negociaciones e instó a Manila a resolver estas diferencias estratégicas e ideológicas. En este sentido, un portavoz del CSN señaló que apoya plenamente las conversaciones exploratorias entre ambas partes, pero a la vez instó al NDFP a mostrar sinceridad y voluntad política y a no imponer precondiciones al diálogo. A la vez, el CSN también criticó los llamamientos que considera han hecho en tiempos recientes el NDFP, el Partido Comunista de Filipinas y el NPA a fortalecer la lucha armada. En este sentido, según cifras oficiales de las Fuerzas Armadas, a mediados de 2024 el NPA tenía solamente siete frentes activos (pero debilitados), una cifra sensiblemente inferior a los 89 que, según Manila, tenía el grupo armado en 2018. Por otra parte, el Gobierno reconoció a principios de septiembre que, en paralelo a las conversaciones exploratorias con el NDFP, sigue manteniendo las llamadas "negociaciones de paz locales", conversaciones directas con unidades

y combatientes del NPA y con gobiernos locales. Dicho enfoque, que fue instaurado durante la administración de Rodrigo Duterte (2016-22) tras la finalización oficial de las negociaciones con el NDFP a finales de 2017, ha sido criticado en numerosas ocasiones por el NDFP por considerar que se trata de una estrategia de contrainsurgencia que solamente busca la cooptación y rendición de miembros del NPA.

PAPÚA NUEVA GUINEA

Designan a un nuevo mediador de Naciones Unidas en las negociaciones sobre la independencia de la isla de Bougainville

A mediados de septiembre, los Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno Autónomo de Bougainville expresaron su satisfacción por la designación de Jerry Mateparae como nuevo mediador de Naciones Unidas en las negociaciones entre ambos gobiernos sobre el estatus político de la isla de Bougainville. Mateparae, diplomático de profesión, había sido, entre otros cargos, Gobernador-General de Nueva Zelanda, jefe de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda y Comandante del Grupo de Supervisión de la Paz de Bougainville, de modo que jugó un rol central en la firma de un acuerdo de alto el fuego definitivo en 1998 que puso fin a una guerra de diez años (1988-98) entre las Fuerzas Armadas de Papúa Nueva Guinea y el grupo armado de oposición Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA, por sus siglas en inglés), conflicto en el que se estima que murió aproximadamente un 10% de la población de la isla. Poco después, en 2001, ambas partes firmaron un acuerdo de paz que contemplaba, entre otras cuestiones, la posterior celebración de un referéndum de independencia en Bougainville una vez se hubieran logrado e implementado otros aspectos del acuerdo. Finalmente este referéndum se celebró en 2019, y casi el 98% de la población votó a favor de la independencia. Sin embargo, el acuerdo de paz estipulaba que los resultados de dicho referéndum no eran vinculantes y que la decisión final sobre el estatus político de Bougainville correspondía al Parlamento de Papúa Nueva Guinea. Por tanto, tras la celebración del referéndum, ambos Gobiernos iniciaron un proceso de negociación con el apoyo de Naciones Unidas y con la facilitación del ex primer ministro de Irlanda, Bertie Ahern, que hasta entonces había sido el presidente de la Comisión para el Referéndum de Bougainville.

En los últimos años ha habido numerosas rondas de negociación entre ambas partes y también se han logrado algunos acuerdos significativos, especialmente en el seno del Organismo Conjunto de Supervisión –el principal mecanismo y espacio de negociación entre ambas partes. Sin embargo, persisten diferencias significativas en aspectos fundamentales del proceso, como la mayoría necesaria en el Parlamento nacional para decidir sobre una eventual independencia de Bougainville (mayoría simple para el Gobierno Autónomo de Bougainville y mayoría de dos tercios para el Gobierno nacional), los plazos y requisitos para que se lleve a cabo dicha votación, la posibilidad de que un compromiso de un acuerdo de paz pueda prevalecer sobre la Constitución o la necesidad o no de que la ciudadanía de todo el país se pronuncie sobre una decisión tan importante como la secesión de una parte del territorio. Tal situación de bloqueo en el proceso negociador llevó a un incremento de la tensión entre ambas partes. El Gobierno de Bougainville declaró su disposición a actuar unilateralmente si Port Moresby no mostraba voluntad política para implementar el resultado del referéndum y algunos analistas advirtieron sobre la posibilidad de que se incrementara significativamente la conflictividad en Bougainville. En este sentido, cabe destacar que a principios de septiembre, en el marco de una visita al país, el Papa Francisco hizo un llamamiento a la responsabilidad y cooperación de ambas partes para lograr un acuerdo definitivo sobre el estatus de Bougainville.

Ante la situación de impasse en la que se hallaban las negociaciones en el primer trimestre de 2024, durante una reunión en el marco del Organismo de Supervisión Conjunto celebrada en mayo de 2024, ambas partes decidieron designar a una persona que facilite el diálogo. De entre las 15 candidaturas posibles para liderar el rol de mediación de Naciones Unidas en las negociaciones, ambas partes eligieron a Jerry Mateparae por su conocimiento previo del país y de la región (también jugó un papel relevante en la transición a la independencia y la estabilización política de Timor-Leste). Algunos analistas han señalado que, además de las dificultades intrínsecas de una negociación de este tipo, otros factores han ralentizado y obstaculizado el avance del proceso, como los serios brotes de violencia comunitaria que han afectado al país en los últimos años, o la volatilidad de la situación política. A modo de ejemplo, a mediados de septiembre, el Gobierno del primer ministro James Marape superó una moción de censura presentada por la oposición.

EUROPA

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Entre avances y dificultades para un acuerdo de paz

MOLDOVA: Elecciones presidenciales y referéndum en medio de tensiones geopolíticas

ARMENIA – AZERBAIYÁN

Avances y dificultades para un acuerdo de paz

Ereván y Bakú acercan posiciones en los últimos meses respecto a un posible acuerdo de normalización de relaciones, aunque persisten obstáculos y divisiones. Mientras, un año después de la ofensiva militar de Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj, la situación para la población armenia desplazada del enclave es de incerteza, con próximos recortes económicos en subsidios para el alojamiento, escasas perspectivas de retorno y situaciones de discriminación.

Tanto el liderazgo de Armenia como de Azerbaiyán han señalado recientemente que en torno al 80% del futuro tratado está ya acordado. Entre otros desarrollos, en agosto Bakú aceptó retirar del borrador del acuerdo la demanda de un corredor que conecte Azerbaiyán con el enclave azerbaiyano de Najicheván a través de Armenia, el conocido como Corredor de Zangezur, y abordar esta cuestión en fases posteriores. La apertura de esa ruta de transporte y su control por tropas rusas era un punto incluido en el acuerdo de fin de hostilidades de 2020, desbordado por la ofensiva militar de Azerbaiyán de 2023.

Además, este ha sido un tema con repercusiones y divisiones regionales. Irán se ha opuesto a la posibilidad de un corredor que a su paso por Armenia estuviera controlado por fuerzas extranjeras y, en conjunto, desconfía de un corredor junto a su frontera que pudiera alterar los equilibrios geopolíticos en la región. Desde finales de 2023, Irán y Azerbaiyán habían iniciado la construcción de una ruta alternativa por territorio iraní, aunque Bakú no había descartado el corredor Zangezur. En septiembre de 2024 Irán lanzó advertencias a Rusia por su apoyo al corredor tras una visita de Putin a Bakú. En todo caso, la retirada por Azerbaiyán a finales de agosto de la cuestión de Zangezur del borrador del acuerdo y la postergación de la discusión ha desencallado parte de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Por otra parte, a finales de agosto ambas partes acordaron y firmaron un documento de regulación del trabajo conjunto de las comisiones fronterizas de los dos países que se apoya en la Declaración de Alma-Ata (1991) como principio para la delimitación fronteriza. El Tribunal Constitucional de Armenia dictaminó que la regulación cumplía con su Carta Magna. Por otra parte, los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán se reunieron en Nueva York en septiembre bajo los auspicios de EEUU, y se comprometieron a nuevos esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Pese a estos acercamientos, el proceso negociador continuaba afrontando obstáculos. Diversos análisis y el propio Azerbaiyán señalaron que el principal escollo era la cuestión en torno a la Constitución armenia. Bakú reclama cambios en ese y otros textos legales porque considera contienen aspiraciones territoriales sobre Azerbaiyán. Por parte de Armenia, en mayo el primer ministro emitió un decreto instando a la preparación de una nueva Constitución para diciembre 2026 y en agosto el Gobierno anunció planes para un referéndum constitucional en 2027. No obstante, Ereván rechaza que estas medidas tengan relación con el proceso negociador, mientras análisis señalan que crece la oposición en Armenia al proceso de paz. En septiembre, el primer ministro armenio ofreció a Bakú firmar un acuerdo interino, que incluyera solo las cuestiones sobre las que hay acuerdo, pero la propuesta fue rechazada por Azerbaiyán.

Por otra parte, las divisiones regionales y globales proyectadas en el conflicto continúan poniendo de manifiesto la fragilidad del contexto. Las tensiones entre Armenia y Rusia se hicieron explícitas de nuevo en los últimos meses. Rusia lanzó fuertes críticas a los ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Armenia de julio. Ese mes, la UE aprobó la primera medida de apoyo a las Fuerzas Armadas de Armenia (10 millones de euros) con el mecanismo del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, criticada por Azerbaiyán por considerarla tendenciosa. Por su parte, el asesor presidencial azerbaiyano Hikmet Hajiyev, llamó a finales de agosto a la retirada de la misión civil de observación de la UE en Armenia (EUMA) y también solicitó imponer restricciones al Ejército de Armenia. Por otra parte, Armenia anunció en septiembre la detención de tres personas consideradas sospechosas de preparar un supuesto golpe de Estado, cuya planificación incluía el reclutamiento y transporte de personas a Rusia para recibir entrenamiento militar.

En el nivel de sociedad civil de Azerbaiyán, se incrementaron las alertas sobre los riesgos de persecución contra activistas y figuras favorables a la construcción de paz con Armenia, a raíz de la detención en agosto del investigador Bahruz Samadov, con cargos de "alta traición", así como el arresto y posterior liberación de Samad Shikhi y Javid Agha, colaboradores en OC Media. En julio había sido detenido también un investigador y defensor de la minoría talish, Igbal Abilov. Amnistía Internacional alertó de estas detenciones, que tuvieron lugar durante la campaña de las elecciones parlamentarias anticipadas del 1 de septiembre. Amnistía Internacional denunció el intento de supresión de la libertad de expresión, especialmente de figuras defensoras de la paz con Armenia, e hizo un llamamiento a gobiernos internacionales a que defiendan la rendición de cuentas de Azerbaiyán en materia de derechos humanos en la recta hacia la cumbre COP29 de noviembre. El grupo local feminista Feminist Peace Collective denunció también estas detenciones y la escalada de la represión que suponen.

MOLDOVA

Elecciones presidenciales y referéndum en medio de tensiones geopolíticas

Moldova acoge el 20 de octubre elecciones presidenciales y un referéndum constitucional para incluir en la Carta Magna la adhesión del país a la UE como un objetivo estratégico, que irán seguidas en 2025 de elecciones parlamentarias. La doble consulta plantea diversos retos y desafíos. Por una parte, tendrá lugar sobre un escenario de fondo de incremento de la tensión entre Moldova y Rusia –alimentada a su vez por la disputa entre Rusia y UE/OTAN/EEUU. Desde la invasión rusa y guerra en Ucrania de 2022, el Gobierno de Moldova (bajo liderazgo del Partido de Acción y Solidaridad, PAS, ganador en las elecciones parlamentarias de 2021 con 62 de 101 escaños) intensificó su acercamiento a la UE y a actores occidentales, manteniendo un complejo equilibrio para el no antagonismo con Rusia. En 2022 el Gobierno del PAS solicitó y recibió el estatus de país candidato a la entrada a la UE y en diciembre de 2023 la UE aprobó el inicio de negociaciones, que arrancaron en junio de 2024. Rusia se ha referido a la adhesión a la UE como una cuestión soberana de Moldova, pero con acusaciones al país de excluir otras opciones, mientras también ha mantenido e incrementado una narrativa hostil hacia la presidenta moldova, Maia Sandu, y el Gobierno del PAS. En conjunto, las tensiones entre Moldova y Rusia han ido escalando en los últimos dos años, materializadas en forma de expulsiones mutuas de diplomáticos –las más recientes el pasado agosto–; presiones de Rusia a través del sector energético; acusaciones de Moldova a Rusia de desinformación y espionaje y de promover un intento de golpe de Estado con apoyo de actores locales como el partido opositor moldavo prorruso Shor (ilegalizado y disuelto en 2023).

En los meses previos a las elecciones se han incrementado las alertas sobre intentos de Rusia de interferencia y desinformación en los comicios, según declaraciones de representantes moldavos, gobiernos occidentales o análisis de think tanks como ICG. En esa línea, EEUU amplió en septiembre las sanciones contra entidades e individuos considerados vinculados a los supuestos intentos de Rusia de interferir en el proceso electoral de Moldova. Previo al referéndum, en septiembre Moldova ha cerrado más medios de comunicación rusos por considerar que suponían riesgos a su seguridad nacional y ha detenido a diversas personas que según las autoridades habrían sido entrenadas en Rusia para llevar a cabo actos de protesta para "desestabilizar" el país. En contraste con el foco en las amenazas de Rusia, algunos análisis subrayan la capacidad de Moldova de llevar a cabo elecciones libres y justas y recomiendan evitar un mayor involucramiento de EEUU y occidental que pudiera ser percibido como presión a Moldova para alejarse de su tradicional posición de neutralidad. Por su parte, ICG identifica, entre otros desafíos, la necesidad de lidiar con los riesgos de interferencia rusa evitando aumentar la polarización y sin caer en persecución antidemocrática de la población moldava afín a Rusia.

Otro de los retos reside en las propia polarización y divisiones políticas internas, plasmadas en torno al referéndum. Por una parte, la consulta llega antecedida de desacuerdos sobre el proceso de integración europea. Ya en marzo, la declaración del Parlamento de apoyo a la integración europea fue aprobada con 54 votos, mientras la oposición se ausentó. La decisión de celebrar conjuntamente las presidenciales y el referéndum es señalada en análisis como una estrategia de la actual presidenta, Maia Sandu (PAS), para consolidar los apoyos con que cuenta y reafirmar el rumbo pro-UE en política exterior en un escenario de amenazas externas a la seguridad. Si sale adelante la consulta, la integración en la UE pasaría a incorporarse automáticamente en la Constitución como un "objetivo estratégico" y con una sección específica.

En el campo opositor, el prorruso Partido de los Socialistas (PSRM) y su líder, el ex presidente Ígor Dodón, anunciaron un boicot al referéndum, poniendo el foco no tanto en la integración europea sino en que no se conozcan las disposiciones y artículos que serán incluidos en la Carta Magna si sale adelante. No obstante, dan apoyo a un candidato presidencial favorable a la integración europea (Alexandr Stoianoglo). Otro polo de actores opositores, el bloque prorruso Pobeda (Victoria) ha llamado a votar "no" en el referéndum. Este bloque se constituyó en abril en Moscú a iniciativa del magnate y político Ilhar Shor, huido desde 2019 a Israel y Rusia y sentenciado *in absentia* por fraude masivo. En todo caso, el Tribunal Supremo denegó la inscripción del bloque electoral Victoria-Pobeda por irregularidades, por lo que los partidos que lo integran no podrán participar conjuntamente. Análisis señalan que las fuerzas en torno a Shor podrían influir en los resultados, con boicots estratégicos o movilizaciones, gracias al apoyo con el que cuenta en ciertas áreas, como la región autónoma de Gagauzia. Para ser válido, el referéndum requiere un 33% de participación (y la opción ganadora, más de la mitad de los votos). En esa línea, los resultados pueden poner de manifiesto el agravamiento de las divisiones políticas territoriales.

ORIENTE MEDIO

IRAQ: Alerta por reforma normativa que podría legalizar el matrimonio infantil

ISRAEL-PALESTINA: Continúa agravándose situación en Gaza y persiste bloqueo en negociaciones de alto el fuego

IRAQ

Alerta por reforma normativa que podría legalizar el matrimonio infantil

A pesar del rechazo, las protestas y oposición por parte de grupos de la sociedad civil en Iraq, parlamentarios iraquíes continúan trabajando para impulsar un cambio del marco normativo (Personal Status Law) que podría legalizar el matrimonio de niñas de hasta nueve años y de niños a partir de 15 y que amenaza con minar el principio de igualdad ante la ley y restringir los derechos de las mujeres. Aprobado en 1959, en su momento el código de estatus personal iraquí –que regula asuntos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de menores y la herencia– fue considerado como uno de los más progresistas de la región. La reforma que se está impulsando permitiría, entre otras cosas, que las parejas firmen un contrato matrimonial que estipule si desean regirse por el Personal Status Law o por determinadas escuelas de jurisprudencia religiosa. Eso supondría que cuestiones religiosas y sectarias, no la ciudadanía, regularían los derechos de las personas en estos ámbitos, creando regímenes legales separados. En la práctica, advierten organizaciones de derechos humanos, esta modificación supondría que una niña iraquí podría estar protegida del matrimonio infantil, mientras que otra podría verse forzada a aceptarlo. La iniciativa legal estipula además que, en caso de disputas sobre qué normativa debe aplicarse, las normas de la religión del marido tienen prioridad.

La ley de Personal Status Law vigente fija en 18 años la edad legal para el matrimonio, tanto para hombres como para mujeres, sin distinción de religiones, aunque permite bodas de menores de 15 años con aprobación judicial. En la práctica, la tasa de matrimonio infantil de niñas en Iraq se ha ido incrementando y se estima que el 28% de las niñas en Iraq se casan antes de la edad legal de 18 años. Adicionalmente, un 22% de los matrimonios no registrados –que no se legalizan, pero son oficiados por autoridades tribales o religiosas– involucrarían a niñas menores de 14 años. En 2018 UNICEF alertaba del matrimonio de 3,3 millones de niñas en Iraq, de las cuales a casi un millón (917.200) las habían casado antes de que cumplieran 15 años. El impulso a esta modificación legal de la Personal Status Law –impulsada por la coalición shií Shhite Coordination Framework– se suma a otras iniciativas recientes de sectores políticos iraquíes orientadas a criminalizar la homosexualidad y prohibir el uso del término "género" y que han bloqueado la iniciativa legal para sancionar la violencia doméstica. En abril pasado, el Parlamento iraquí aprobó una normativa que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con penas de entre 10 y 15 años de prisión y estableció sanciones de entre uno y tres años contra las personas que se sometan a intervenciones quirúrgicas para "imitar a las mujeres". Organizaciones de derechos humanos alertan que estas tendencias están forzando a las activistas iraquíes a concentrarse en la defensa de los limitados derechos que tienen garantizados, más que en la promoción de nuevas garantías. Parlamentarias iraquíes temen que la norma sobre la Personal Status Law sea aprobada como consecuencia de las presiones políticas vinculadas a la celebración de elecciones en 2025.

ISRAEL – PALESTINA

Continúa agravándose situación en Gaza y persiste bloqueo en negociaciones de alto el fuego

La ofensiva militar israelí sobre Gaza continúa provocando muerte y destrucción durante el trimestre, elevando a 41.650 el número de palestinos y palestinas muertos desde el 7 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024. A mediados de septiembre las autoridades de Gaza dieron a conocer la identidad de 34.344 personas fallecidas a causa de los ataques israelíes (80% del total de víctimas), en su mayoría civiles. Entre ellas, 11.355 menores, casi 3.000 personas mayores de 65 años y 6.297 mujeres. Israel asegura haber dado muerte a 17.000 milicianos palestinos, pero no ha aportado evidencias de que fueran combatientes ni proporcionado una estimación de las bajas civiles provocadas por sus ofensivas. El balance de víctimas del Ministerio de Salud de Gaza podría llegar a ser muy superior, ya que aún existen muchos cuerpos sepultados en medio de los escombros y porque solo se contabilizan las muertes directamente provocadas por ataques explosivos o proyectiles. Paralelamente, se agudizó el deterioro de la situación humanitaria, agravada por el impacto del calor del verano, la falta de agua y productos de higiene que, entre otras cosas, favorecieron enfermedades a la piel y estomacales. En este contexto, también se constató la propagación de la poliomelitis en Gaza 25 años después de su erradicación de la Franja. Organizaciones humanitarias y de derechos humanos como Save the Children denunciaron que el resurgimiento de la polio en Gaza era resultado directo de la destrucción de las infraestructuras de salud y agua y de las restricciones impuestas por Israel para el acceso a la ayuda humanitaria y suministros. Ante la gravedad de la situación, Naciones Unidas instó a la implementación de "pausas humanitarias" para permitir una campaña de vacunación contra la polio, que causa parálisis e incluso

la muerte en menores. Israel y Hamas acordaron pausas diarias de ocho horas en áreas específicas para permitir la vacunación y, a mediados de septiembre, más de medio millón de menores palestinos habían sido vacunados. Sin dejar de valorar positivamente esta medida, diversas voces insistieron en que lo más urgente era alcanzar un alto el fuego permanente.

Sin embargo, las negociaciones indirectas para un alto el fuego permanecieron estancadas durante el trimestre. La actividad diplomática se intensificó en agosto después del asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, el 30 de julio en Teherán, a donde había asistido a la toma de posesión del nuevo presidente iraní. Horas antes, Israel había asesinado al comandante de Hezbollah, Fuad Shukr. Entonces, Irán y Hezbollah advirtieron que responderían al ataque, atribuido a Israel, y se acrecentaron los temores de una escalada regional. En un intento por disuadir un eventual ataque iraní, EEUU desplegó fuerzas a la región, incluyendo un submarino nuclear. Irán, sin embargo, informó que vengaría los asesinatos de Haniyeh y Shukr de una manera que no comprometiera los esfuerzos por conseguir un alto el fuego en Gaza. En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, realizó una nueva visita a la zona a mediados de agosto. El funcionario estadounidense y los otros mediadores, Qatar y Egipto, habrían intentado favorecer un acuerdo, pero Washington no obtuvo ningún compromiso del Gobierno de Netanyahu para avanzar en un alto el fuego. Hamas, por su parte, consideró que la propuesta presentada se acercaba demasiado a las demandas de Israel. El plan en el que se ha estado trabajando desde hace meses involucra un alto el fuego inicial de seis semanas, período en el cual un número limitado de rehenes (mujeres, personas ancianas y enfermas) serían liberadas a cambio de la excarcelación de palestinos de cárceles israelíes. En una segunda etapa, se intercambiarían militares y cuerpos de soldados israelíes, a cambio del repliegue israelí de Gaza y el retorno de la población desplazada. El principal escollo continuaba siendo que Hamas plantea el retiro total de Israel de Gaza, rechazado por el Gobierno de Netanyahu. Según trascendió, Israel desea mantener tropas en el llamado corredor Philadelphi, una zona estratégica en la frontera entre Gaza y Egipto. A partir de septiembre, el foco de atención se trasladó al llamado frente norte, con una intensificación de los ataques israelíes sobre Líbano (véase análisis sobre Israel-Líbano).

Adicionalmente, en otro hecho relevante del trimestre, cabe destacar que el 19 de julio la Corte Internacional de Justicia dio a conocer su Opinión Consultiva que reafirmó que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este y el régimen asociado a ellos se habían establecido y continuaban existiendo en violación al derecho internacional. El dictamen, sin precedentes, subrayó que Israel practica una ocupación ilegal con la que pretende una anexión permanente.

Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.

escola de cultura de pau

UAB Universitat Autònoma de Barcelona

Escola de Cultura de Pau
Edifici B13, Carrer de Vila Puig,
Universitat Autònoma de Barcelona 08193
Bellaterra (España)
Tel: +34 93 581 14 14
pr.conflictes.escolapau@uab.cat
escolapau.uab.cat

Con el apoyo de:

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

@escolapau EscolaPau escoladeculturadepau